



Facultad de Filosofía y Letras
Máster en Historia Contemporánea

Título (en español y en inglés)
**Crisis social y crisis demográfica en la Cantabria del primer
tercio del siglo XIX**
**Social crisis and demographic crisis in the Cantabria of the
first third of the 19th century**

Autor/a
Óscar Toyos Martínez
Director/a
Miguel Ángel Sánchez Gómez

Curso 2018 / 2019

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. CAUSAS Y CARACTERIZACIÓN DEL PRIMER CARLISMO.....	5
3. CAUSAS Y NATURALEZA DE LA CONTRARREVOLUCIÓN EN CANTABRIA.....	13
4. LOS PROCESOS DESAMORTIZADORES EN CANTABRIA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX.....	33
5. ANÁLISIS DE LA FUENTE.....	47
6. CARLISMO, DEMOGRAFÍA Y SOCIEDAD.....	50
7. CONCLUSIONES.....	63
8. BIBLIOGRAFÍA.....	68
9. FUENTES DOCUMENTALES.....	71

ÍNDICE DE MAPAS

MAPA 1. Número de carlistas por cada 100 habitantes en 1838-1839.....	25
MAPA 2. Desamortización de Godoy. Municipios según desembolsos.....	35
MAPA 3. Geografía de la venta de tierras concejiles durante la Guerra de Independencia.....	38
MAPA 4. Distribución municipal de las ventas durante la desamortización de Mendizábal.....	43
MAPA 5. Índices de masculinidad por municipios en 1824.....	56
MAPA 6. Origen geográfico de la inmigración montañesa a Santander en 1829.....	60

ÍNDICE DE GRÁFICAS

GRÁFICA 1. Alistamientos en la Quinta Brigada de Voluntarios Realistas (1827-1833).....	30
GRÁFICA 2. Evolución de los arbitrios destinados a los Voluntarios Realistas (1827-1833).....	31
GRÁFICA 3. Superficie enajenada (en hectáreas) durante la desamortización de Godoy.....	36

GRÁFICA 4. Valor rematado (en reales) durante la desamortización de Godoy.....	36
GRÁFICA 5. Superficie enajenada (en hectáreas) durante la Guerra de Independencia.....	39
GRÁFICA 6. Valor rematado (en reales) durante la Guerra de Independencia.....	40
GRÁFICA 7. Superficie enajenada (en hectáreas) durante la desamortización del Trienio Liberal.....	41
GRÁFICA 8. Valor rematado (en reales) durante la desamortización del Trienio Liberal.....	42
GRÁFICA 9. Superficie enajenada (en hectáreas) durante la desamortización de Mendizábal.....	45
GRÁFICA 10. Valor rematado (en reales) durante la desamortización de Mendizábal.....	45
GRÁFICA 11. Orígenes geográficos de la inmigración a Santander en 1829.....	61

ÍNDICE DE IMÁGENES

IMAGEN 1. Detalle del Censo de Policía de 1824 de la población de Adal.....	48
IMAGEN 2. Detalle del Censo de Policía de 1824 de la población de Praves.....	49

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1. Ayuntamientos con mayor número de carlistas y coeficientes respecto a la población total.....	53
TABLA 2. Índice de masculinidad en diferentes municipios cántabros en 1824.....	55
TABLA 3. Municipios según los niveles de emigración en 1824.....	58

1. INTRODUCCIÓN

Partiendo de la base de que el movimiento carlista tuvo un peso mínimo en Cantabria (a pesar de la cercanía de la región con el gran foco vasco-navarro) parece interesante profundizar en las causas que la historiografía de los años 80 del siglo pasado ha atribuido a la población montañesa para hacerla participar en los movimientos contrarrevolucionarios del primer tercio del siglo XIX.

En este sentido se realizará un breve repaso de las causas y la caracterización del carlismo en varias regiones donde este movimiento sí tuvo una incidencia importante, haciendo un sucinto repaso a las motivaciones que llevaron a estos territorios a levantarse contra el orden liberal, y a los desajustes económico-sociales que se produjeron desde la Guerra de Independencia en unas zonas fronterizas con gran carga bélica.

Seguidamente se intentarán mostrar las principales aportaciones de la única monografía que se ha hecho sobre los movimientos contrarrevolucionarios montañeses de la primera mitad del siglo XIX, la obra de Vicente Fernández Benítez, *Carlismo y rebeldía campesina. Un estudio sobre la conflictividad social en Cantabria durante la crisis final del Antiguo Régimen* (1988). En ella se pretenden diseccionar las causas de estos procesos en ese periodo en Cantabria, así como llevar a cabo una caracterización socioeconómica de sus supuestos protagonistas. Para el autor existen dos momentos en los que se manifiesta una notoria violencia y reacción al orden liberal, durante el Trienio Liberal y en 1833, y ello lo justifica y respalda con una serie de factores que se recogían en estudios sobre la conflictividad campesina hechos en los años 80 y que parece extrapolar al caso montañés¹.

Una de las principales causas que se han asociado a la oposición de parte de la población (especialmente el clero) a los ideales liberales durante el primer tercio del siglo XIX, es la desamortización. Para intentar demostrar el escaso peso, tanto de tipo económico como espacial, que tuvieron los distintos procesos desamortizadores en la Cantabria de la época, es importante revisar la verdadera situación material de la Iglesia montañesa a comienzos del siglo XIX, además de conocer los datos reales de la superficie enajenada y el valor total rematado. Cuando se comparan estos datos con los de otras regiones donde el peso de los

¹ Como el de SOBOUL, A., *Problemas campesinos de la Revolución, 1749-1848*, Madrid, Siglo XXI, 1980, o el de FONTANA, J., "Crisi camperola i revolta carlina", en *Recerques: Història, economia i cultura*, nº 10, 1980, pp. 7-16.

movimientos contrarrevolucionarios fue evidente, se pueden adivinar singularidades para el caso montaños que merecen ser repasadas.

Otro de los aspectos que tradicionalmente se ha vinculado a esta época tan convulsa es el de una importante crisis demográfica que se manifestaría en un aumento significativo de la emigración. Sin embargo, partiendo del análisis del Censo de policía de 1824 para diversas comarcas cántabras afectadas de distinta manera por el fenómeno contrarrevolucionario, se intentará arrojar luz sobre la verdadera incidencia de los movimientos migratorios en dichas localidades.

Por lo tanto, el objeto del siguiente trabajo es completar las aportaciones que Vicente Fernández Benítez hizo a finales de los años 80 del siglo pasado sobre las causas de la conflictividad campesina y sus efectos, ayudándonos de nuevos trabajos, métodos, indicadores y fuentes no utilizadas por el autor que han puesto de relieve otras visiones del mundo rural montaños durante la crisis del Antiguo Régimen.

2. CAUSAS Y CARACTERIZACIÓN DEL PRIMER CARLISMO

El carlismo es considerado como un movimiento sociopolítico de carácter antiliberal y contrarrevolucionario surgido a finales del Antiguo Régimen, que consiguió movilizar a millares de hombres e implicar a otras tantas familias². Durante todo el siglo XIX el carlismo contará con una amplia adhesión popular, lo cual nos permite referirnos al carlismo como un movimiento contrarrevolucionario de masas. Inicialmente predominaban los campesinos, pero identificar carlismo con movimiento campesino de forma exclusiva no parece correcto, pues no puede obviarse la presencia de artesanos ni de parte del clero y de las hidalguías locales: estamos ante un movimiento socialmente heterogéneo³.

El nacimiento del carlismo está íntimamente ligado a la muerte del Antiguo Régimen. Aunque hay autores que consideran que no puede hablarse de carlismo hasta finales de los años 20 o inicios de los 30 del siglo XIX⁴. Los propios carlistas consideraban sus combates de 1833 como la prosecución de casi todos los librados en el decenio precedente, continuidad que aleja la tentación de considerar el carlismo como un asunto dinástico⁵. Lo más adecuado parece decidirse por 1820 o por el Trienio Liberal, estableciendo una línea de continuidad entre realismo y carlismo: la movilización popular y las guerras del Trienio se encuentran más próximas a las carlistas que a las de los años 1808-1814⁶. Hay que tener en cuenta que el período 1814-1820 fue muy agitado, caracterizándose por la restauración del absolutismo, dificultades económicas (pérdida del mercado colonial, crisis y colapso de la Hacienda) y conatos liberales por poner fin a la monarquía absoluta (como el pronunciamiento de 1820)⁷.

Las actuaciones de los liberales contaron con la oposición y hostilidad de algunos sectores: se puede decir que la contrarrevolución realista fue alimentada por el despliegue legislativo liberal⁸. Pero, ¿quiénes eran los realistas? Campesinos y jornaleros, seguidos de artesanos, clero rural y regulares, pero también empleados de la administración, militares, profesionales, algunos nobles, alto clero y colaboradores de Fernando VII. En la lucha contra los liberales coincidieron sectores diferentes a los que perjudicaba el desmantelamiento del Antiguo Régimen: realismo y carlismo se beneficiaron de la reacción de estos grupos, ofreciéndoles un marco de politización que pasaba por la vía del antiliberalismo. Cuestiones como las

² CANAL, J., *El carlismo: dos siglos de contrarrevolución en España*, Madrid, Alianza Editorial, 2000, p. 9.

³ *Ibidem*, p. 22.

⁴ *Ibid.*, p. 28.

⁵ *Ibid.*, p. 29.

⁶ *Ibid.*, p. 31.

⁷ *Ibid.*, p. 33.

⁸ *Ibid.*, p. 34.

desamortizaciones eclesiástica y civil, la política tributaria del Trienio Liberal, la decadencia de determinadas ocupaciones, la introducción de nuevos valores, el dismantelamiento de estructuras e instituciones tradicionales, la crisis económica y la efectividad de determinados canales de transmisión ideológica han sido comúnmente aceptados como la base sobre la que se asentaron las opciones contrarrevolucionarias en los años 20 del siglo XIX⁹.

Sin embargo, podemos encontrar ciertas particularidades en los distintos territorios donde triunfaron los movimientos contrarrevolucionarios. El caso de Aragón ha sido profundamente estudiado por Pedro Rújula. Allí la Guerra de la Independencia había producido una profunda conmoción en las estructuras sociales, económicas e ideológicas anteriores. Por un lado, los precios de los productos agrícolas principales descendieron de forma continuada en todo el país, y en Aragón lo hicieron por debajo de la media nacional¹⁰. Sin embargo, el análisis de la situación en que se encuentra la economía aragonesa en los primeros treinta años del siglo XIX no permite apreciar ningún cambio fundamental en la estructura que justifique la insurrección de 1833 como producto de una profunda transformación; parece más verosímil que lentamente se fueran manifestando los efectos de un modelo económico de Antiguo Régimen en medio de la coyuntura de crisis de principios del siglo XIX¹¹.

Hay que tener en cuenta que en Aragón, en los meses posteriores a la proclamación de la Constitución en Zaragoza (1820), no se produjeron acciones de rechazo ni se difundieron proclamas contrarrevolucionarias. Sin embargo, aunque no puede hablarse de un clima de hostilidad hacia el nuevo orden, tampoco es posible negar que no se iniciaran en estos momentos dinámicas reaccionarias: éstas existieron, y muy tempranas, pero no adoptaron la forma de rechazo abierto contra la Constitución, sino que se dirigieron preferentemente hacia el control del poder¹². Mucho antes de que pueda hablarse de descontento popular y antes, incluso, de la formación de partidas, van a producirse los movimientos de las oligarquías tradicionales para conservar el poder y dirigirlo en función de sus intereses¹³.

En la oleada inicial de revueltas urbanas aragonesas comienza a destacar como factor constante el “descontento ciudadano”, al que hay que sumar la “definición local del conflicto”, es decir, que los hechos se explican en buena medida por la configuración de la

⁹*Ibíd.*, p. 36.

¹⁰ RÚJULA, P., *Rebeldía campesina y primer carlismo: los orígenes de la Guerra Civil en Aragón (1833-1835)*, Zaragoza, Departamento de Educación y Cultura, 1995, pp. 30-31.

¹¹*Ibíd.*, p. 39.

¹² RÚJULA, P., *Constitución o Muerte. El Trienio Liberal y los levantamientos realistas en Aragón (1820-1823)*, Zaragoza, Edizións de l'Astral, 2000, p. 48.

¹³*Ibíd.*, p. 53.

realidad local¹⁴. Es reseñable, a su vez, el papel que en la dinámica social juegan los milicianos y el clero. Por un lado, la agresión contra los milicianos se trata de justificar porque encarnan en los municipios la imagen de la revolución. Por otro, dado el carácter local de estos primeros conflictos, los clérigos tienen una importante presencia entre los agentes de las asonadas, tanto directamente como por incitación o consentimiento desde su privilegiada posición para influir sobre la sociedad¹⁵.

En Aragón, la reacción contra el régimen constitucional no posee una característica definitoria por la que pueda ser identificada: el movimiento reaccionario presenta componentes sociales y políticos muy diversos, pues ni siquiera los objetivos que persiguen sus distintos componentes son coincidentes. En efecto, existe una relación evidente entre los objetivos perseguidos a través de la contrarrevolución y la función que se cumple en el entramado insurreccional. Así, en la estructura central del movimiento se encuentran los sectores sociales que contemplan la contrarrevolución como “lucha por el poder” en todas sus vertientes (política, económica, social, etc.); a su lado se encuentran las clases sociales que esperan del triunfo una “mejora de las condiciones materiales de vida”¹⁶.

Los cuadros dirigentes de la contrarrevolución enfocan su objetivo en la lucha por un poder que habían perdido o llevaban camino de perder, y pusieron sus ojos en unas clases populares que veían como instrumento para derribar el régimen constitucional¹⁷. Si bien es cierto que las clases populares urbanas proporcionaron su apoyo al liberalismo, en el medio rural se encuentra una multitud de campesinos descontentos susceptible de ser movilizada en apoyo de un proyecto que postulara una mejora de las condiciones de vida. El protagonismo a la cabeza del movimiento contrarrevolucionario lo ocuparon las oligarquías tradicionales y los eclesiásticos: la influencia social de ambos tiene gran relevancia en el ámbito local¹⁸. La actividad contrarrevolucionaria de los eclesiásticos está perfectamente documentada. Así, las altas jerarquías son acusadas de hostilidad y de participar en complots dirigidos a derribar el régimen¹⁹. Dentro de los eclesiásticos sin grado se establecían distinciones entre los seculares y los regulares²⁰: entre los primeros había clérigos con cierta tendencia a contagiarse con las ideas que circulaban en la sociedad, y los segundos fueron identificados frecuentemente con

¹⁴*Ibíd.*, p. 90.

¹⁵*Ibíd.*, p. 91.

¹⁶*Ibíd.*, p. 215.

¹⁷*Ibíd.*, p. 216.

¹⁸*Ibíd.*, p. 217.

¹⁹*Ibíd.*, p. 219.

²⁰*Ibíd.*, p. 220.

la contrarrevolución en bloque²¹. El discurso de los eclesiásticos era muy importante en la formación de la opinión en el medio rural, y su intervención era decisiva para la difusión de una primera imagen, positiva o negativa, de la Constitución y el ideario liberal²².

Aunque haya razones para pensar que la reacción durante el Trienio Liberal respondió a una organización planeada y articulada “desde arriba”, y aunque la insurrección tenga un origen ligado a una élite próxima al poder durante el régimen absoluto que se vale de sus mecanismos para extender la agitación contrarrevolucionaria, ello no significa que la base social del movimiento carezca de motivos propios para sumarse a la insurrección. Todo lo contrario, pues las clases populares (especialmente el campesinado) llevaban tiempo acumulando un descontento que no se había podido manifestar durante el absolutismo. Sin embargo, en el Trienio Liberal se dieron dos circunstancias que permitieron la explosión de esta rebeldía campesina: la debilidad del Estado en el medio rural y la aparición de unos cuadros dirigentes²³. Éstos tuvieron la capacidad de instrumentalizar toda aquella carga de rebeldía campesina acumulada durante el sexenio absolutista contra la Constitución: la contrarrevolución adquiría así un carácter social y transformaba una lucha por el poder en un movimiento insurreccional de base popular²⁴.

La captación de algunos sectores del campesinado por parte de la contrarrevolución se produjo al amparo de la progresiva degradación económica que atravesaba el campo aragonés. En una coyuntura de descenso continuado de los precios de los productos agrícolas, aumentó la presión fiscal sobre el campesinado, resultando particularmente oneroso el año 1822. Proyectos como la disolución de señoríos o la desamortización de los bienes de manos muertas apenas tuvieron efecto, y cuando se pusieron en práctica no redundaron en beneficio del campesinado. Labradores y jornaleros podían hallar en la insurrección una vía para tratar de solventar sus dificultades económicas: pocos podían resistirse al ofrecimiento de una soldada diaria y a la eventualidad del saqueo de casas de liberales²⁵. Las conexiones entre insurrección y degradación económica de las condiciones del campo pueden apreciarse a través de la identificación entre insurrecto y ladrón, así como en la coincidencia entre insurrección y ataque a la propiedad²⁶.

²¹*Ibíd.*, p. 221.

²²*Ibíd.*, p. 225.

²³*Ibíd.*, p. 230.

²⁴*Ibíd.*, p. 231.

²⁵*Ibíd.*, pp. 233-234.

²⁶*Ibíd.*, p. 236.

Tras el Trienio Liberal, paralelamente al surgimiento de partidas realistas por distintos lugares de Aragón, fue desgastándose el apoyo popular a la revolución liberal, dañada por la legislación del medio diezmo, la venta de bienes desamortizados y la nueva contribución²⁷. Sin embargo, como se ha indicado anteriormente, la reacción tiene siempre origen en la esfera del poder, y los objetivos de su actividad están desprovistos de carácter popular²⁸. Puede decirse que el campesinado participó en la rebelión realista contra el sistema constitucional manteniendo en su seno la especificidad de sus problemas y apoyando las acciones absolutistas en su lucha contra un régimen liberal que en nada les había favorecido. Esta diferenciación entre rebelión realista y rebelión campesina estaba potenciada por el escaso control de la cúspide sobre la base combatiente²⁹. La actividad insurreccional del campesinado demostrará su naturaleza particular después de 1823, cuando, restaurados los poderes del monarca, continuará activa invocando figuras (Riego, la Constitución) totalmente contrarias a las respaldadas hasta el momento, pero que manifestaban su oposición al poder³⁰.

Para acabar con el caso aragonés, Pedro Rújula destaca que, desde el punto de vista del campesino, con los cambios políticos se habían agudizado las estrecheces ancestrales y habían aparecido nuevos problemas: descenso de los precios agrícolas en una región exportadora, decadencia del sector textil, escasa monetarización frente al pago de impuestos en dinero³¹. El campesinado, por un lado, y los estamentos sociales privilegiados en el Antiguo Régimen, por otro, fueron dos focos de descontento que convergieron en España en el primer tercio del siglo XIX, pero su existencia no sirve para explicar lo que sucedió: hay que atender a la *evolución histórica*, pues el fenómeno contrarrevolucionario debe ser comprendido como proceso. Así, nos encontramos con un campesinado descontento y desarticulado que sólo podía manifestar su protesta a través de las fisuras que le dejaba el Estado, es decir, en los momentos en que surgen crisis de autoridad que afectan al poder. Estos momentos de crisis del Estado coinciden con etapas de hundimiento del poder absoluto, que dan lugar a un proceso de sustitución por autoridades revolucionarias: se trata de etapas de intensa actividad contrarrevolucionaria, y por ello existe una identificación temporal entre contrarrevolución y descontento campesino, pues ambos emergen en los mismos momentos³².

²⁷ RÚJULA, P., *Rebeldía campesina y primer carlismo...*, p. 48.

²⁸ *Ibidem*, p. 56.

²⁹ *Ibid.*, p. 116.

³⁰ *Ibid.*, p. 117.

³¹ RÚJULA, P., *Contrarrevolución. Realismo y Carlismo en Aragón y el Maestrazgo, 1820-1840*, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, pp. 426-427.

³² *Ibidem*, p. 433.

El caso de Navarra, profusamente estudiado por Joseba de la Torre, hunde sus raíces en la Guerra de Independencia. En dicha región se contribuyó mediante el pago de impuestos de guerra en metálico (directos o indirectos) y en especie, requisas de cosechas y ganado, pillaje y saqueo indiscriminado y desamortizaciones de bienes del clero³³. Entre 1808 y principios de 1810 el mecanismo tributario aplicado fue el empréstito forzoso y reintegrable mediante bienes nacionales y la requisición ordinaria de granos. A partir de febrero de 1810 se implantó una política fiscal más fuerte (reforma tributaria, nueva contribución, etc.). La escalada contributiva debió de resultar insuficiente, ahondando la expoliación de las propiedades campesinas en la segunda mitad de 1811. En 1812 la incapacidad para recaudar fue palpable, tanto en la cuota exigida en metálico como en la contribución en especies³⁴. A raíz de la carestía de víveres manifestada desde el invierno de 1810-1811, las exacciones de suministros pasaron a incluirse en las contribuciones ordinarias. La intensificación del pillaje explica que el ejército francés acaparase gran parte del excedente agrario de 1811-1812 y redujese las posibilidades del mundo campesino para la siguiente siembra³⁵.

Sometidos a los excesos de los ataques armados, a las fluctuaciones de un mercado alzista y al hambre por unas cosechas catastróficas, los distintos sectores campesinos habían recibido un golpe definitivo en sus economías³⁶. Desde los levantamientos de 1808 fueron surgiendo cuadrillas compuestas por pocos hombres dispuestos a enfrentarse a los franceses. Estos levantamientos respondieron más a los efectos que sobre el campesinado (y el clero) provocó la implantación de la legislación liberal francesa, que a la propia invasión extranjera³⁷.

El conflicto bélico condujo a la quiebra hacendística de los ayuntamientos, lo que provocó la venta de patrimonio concejil³⁸. Dentro de esta venta se ha confirmado que el número de fincas de carácter rústico desamortizadas fue muy superior al de las inmobiliarias³⁹. La transferencia de la titularidad jurídica de los bienes administrados por los ayuntamientos fue a parar a las clases sociales del campesinado que vivían en esas localidades (fundamentalmente las

³³ DE LA TORRE, J., *Los campesinos navarros ante la guerra napoleónica*, Madrid, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 1991, p. 28.

³⁴ *Ibidem*, pp. 29-45.

³⁵ *Ibid.*, p. 49.

³⁶ *Ibid.*, p. 51.

³⁷ *Ibid.*, pp. 67-68.

³⁸ *Ibid.*, p. 97.

³⁹ *Ibid.*, p. 129.

oligarquías locales); es reseñable que entre esos compradores no existía ningún nexo ideológico, pues había tanto liberales como absolutistas moderados y realistas⁴⁰.

La transferencia de propios y comunales a manos privadas lesionó los intereses de otros vecinos debilitados por la crisis económica al extinguirse servicios comunitarios que hasta entonces ofrecía el ayuntamiento⁴¹. Se constata tras la Guerra de Independencia una repulsa de las comunidades rurales a la sangría económica a la que fueron sometidas por las instituciones navarras y por las exacciones de los ejércitos británico, español y portugués⁴². Las secuelas de la guerra y la presencia de tantas tropas en este territorio habían postrado a municipios y campesinos a un estado crítico: así pues, las preocupaciones de los navarros estaban más vinculadas a la resolución de sus problemas de subsistencia que a la trama absolutista de las clases dirigentes⁴³. Sin embargo, la vuelta al absolutismo continuó con la problemática de la sociedad campesina, pues tuvo que afrontar las imposiciones fiscales de la clase política⁴⁴.

Clara Martínez Dorado da una vuelta de tuerca a la acción colectiva local contra el Estado en el primer tercio del siglo XIX, sosteniendo que ésta se caracterizó por estar mediatizada por las relaciones clientelares o de patronazgo existentes⁴⁵. Entre 1808 y 1833 tanto el Estado absolutista como el liberal intentaron arrebatar a los señores y notables locales la totalidad o parte de los recursos de los que aún disponían. A comienzos del siglo XIX el aparato estatal absolutista poseía escasa capacidad de negociación para obtener los recursos que necesitaba para subsistir. A su vez, las economías campesinas atravesaban una crisis de transformación hacia su mercantilización, lo cual hacía que el edificio social y cultural campesino se tambalease. La interrelación de ambas realidades hizo que durante la invasión francesa los patronos de determinadas regiones fuesen capaces de movilizar a sus clientelas en contra de las pretensiones estatales⁴⁶. Desde el punto de vista económico, sostiene que hay mayores posibilidades de conflicto en los lugares donde predominaba el cultivo de cereales, vid o aguardiente: esto es, zonas agrarias de secano con mayoría de pequeños propietarios o

⁴⁰ *Ibíd.*, p. 232.

⁴¹ DE LA TORRE, J., *Lucha antifeudal y conflictos de clases en Navarra, 1808-1820*, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1992.

⁴² *Ibíd.*, p. 39.

⁴³ *Ibíd.*, p. 47.

⁴⁴ *Ibíd.*, p. 56.

⁴⁵ MARTÍNEZ DORADO, C., “La relación entre el poder central y los poderes locales: clientelismo y conflicto en Navarra y Valencia, 1808-1841”, en ROBLES EGEA, A. (comp), *Política en penumbra. Patronazgo y clientelismo políticos en la España contemporánea*, Madrid, Siglo XXI de España Editores, 1996, p. 117.

⁴⁶ *Ibíd.*, p. 122.

arrendatarios en nivel de subsistencia y endeudados, en proceso de proletarización y sufriendo los efectos de las crisis de subsistencias del período, que comienzan con la liberalización del precio de los granos y la caída del comercio ultramarino de productos manufacturados. Los pequeños propietarios y arrendatarios se endeudaron cada vez más ante la necesidad de renovar sus cultivos no rentables y pagar las nuevas contribuciones⁴⁷. En el orden político, la mayor intervención estatal debida a la búsqueda de recursos para la guerra hizo que el endeudamiento de algunos municipios fuera insuperable; al mismo tiempo, las oligarquías locales se vieron amenazadas por la entrada de nuevos grupos sociales en el control de las instituciones municipales y regionales⁴⁸.

Estudiando el caso de Navarra, Martínez Dorado observa que la política de los notables provinciales, como portavoces de las organizaciones vecinales de concejo y valle, les enfrentaba al Gobierno central en defensa de instituciones y fueros. Los gobiernos locales de determinadas comarcas estaban dominados por hidalgos que mantenían una relación clientelar evidente con sus arrendatarios. Así, la defensa de los Fueros fue utilizada por los carlistas, una vez comenzada la guerra, para aglutinar a la población campesina, enarbolando la bandera de la lucha contra las quintas, contra la contribución común y contra la ruptura de la comunidad campesina⁴⁹.

Como conclusión puede decirse que, al estudiar los movimientos contrarrevolucionarios del primer tercio del siglo XIX en España, se puede apreciar una unión consistente entre los ideales proabsolutistas de unas élites que veían peligrar un *status* privilegiado y las reclamaciones de una amplia base social integrada por los estratos más bajos del mundo rural, los cuales se encontraban inmersos en un proceso de crisis del sistema económico tradicional, y que no sabían o podían adaptarse a una inevitable nueva realidad.

⁴⁷*Ibíd.*, p. 123.

⁴⁸*Ibíd.*, p. 124.

⁴⁹*Ibíd.*, p. 130.

3. CAUSAS Y NATURALEZA DE LA CONTRARREVOLUCIÓN EN CANTABRIA

Una vez vistas las características y causas del carlismo en distintas regiones de España, se procederá a profundizar en el caso montañés a partir del primer y único trabajo que aborda específicamente dicha temática, el libro de Vicente Fernández Benítez, *Carlismo y rebeldía campesina. Un estudio sobre la conflictividad social en Cantabria durante la crisis final del Antiguo Régimen*.

En 1820 y 1833 tienen lugar, a nivel nacional, unos procesos reaccionarios ante la llegada al poder del orden liberal que fueron protagonizados por los grupos sociales que sintieron dañados sus intereses materiales o sus situaciones de privilegio social. Hay que partir del hecho de que ni realismo ni carlismo tuvieron en Cantabria fuerza suficiente para promover por sí mismos la insurrección armada, procediendo la dinámica de la guerra de estímulos ajenos a la región. Las dos guerras civiles en Cantabria aportan dos interesantes realidades, la dificultad del asentamiento del nuevo orden liberal⁵⁰ y la dirección del movimiento reaccionario por parte de los antiguos elementos privilegiados, quienes respaldarían una insurrección popular rural. Así pues, el movimiento contrarrevolucionario integró niveles superpuestos de protesta bajo la apariencia de reivindicación del Antiguo Régimen: en efecto, los contrarrevolucionarios no provenían de un único grupo social, sino que conformaron una realidad heterogénea que convergía en la figura de un enemigo común, pues encontramos tanto a carlistas o realistas partidarios del absolutismo, como a pobres y marginados del campo que expresaban una protesta más social que política de manera violenta. Si bien es cierto que la historiografía liberal y la conservadora hicieron hincapié en la lucha entre burguesía liberal y antiguos privilegiados filoabsolutistas, Vicente Fernández busca desechar el papel subalterno atribuido a las masas populares y ahondar en sus problemas e inquietudes como uno más de los motores del movimiento contrarrevolucionario⁵¹.

Al analizar la primera oposición de carácter involucionista al régimen liberal tras su llegada al poder en 1820, el autor destaca el papel del clero en la misma, pues los únicos problemas de orden político en la región a comienzos de 1821 estaban originados por clérigos enemigos de la Constitución⁵². Durante el Trienio Liberal se detectan dos focos realistas en la provincia, la zona oriental (bajo la influencia del realismo vasco) y la zona sur y central (bajo la influencia

⁵⁰ FERNÁNDEZ BENÍTEZ, V., *Carlismo y rebeldía campesina. Un estudio sobre la conflictividad social en Cantabria durante la crisis final del Antiguo Régimen*, Madrid, Siglo XXI de España Editores, 1988, p. 1.

⁵¹ *Ibidem*, p. 2.

⁵² *Ibid.*, p. 7.

del realismo castellano). Aparecen grupúsculos de “facciosos” que se encuentran con la pasividad de los campesinos, quienes no encontraban motivos para defender al Estado constitucional de aquellos que despojaban de sus bienes a los grupos dirigentes de las comunidades rurales⁵³. Dicha pasividad se verá influenciada por los párrocos rurales, por las dificultades económicas (agudizadas por la larga sequía de 1821) y por el descontento provocado por la presión fiscal gubernamental.

La actuación del clero anticonstitucional durante estos primeros años sirvió para identificar Iglesia y religión con absolutismo y con antiliberalismo⁵⁴. Mientras la población rural comenzaba a dar muestras de su malestar, los absolutistas intentaban coordinar sus planes para derribar al Estado constitucional en nombre del rey y de la religión; cuando éstos integraron en sus filas al campesinado montañés se creó un clima de guerra civil en la región, dejando recluido al liberalismo en los núcleos urbanos. Dentro de este proceso de integración de gran parte del campesinado en el movimiento faccioso es muy decisiva la crisis de subsistencias de 1821: la población cántabra tuvo que enfrentarse a una terrible sequía que destruyó cosechas y provocó incendios en los bosques. Dicha crisis provocó un aumento de los robos y otros delitos contra la propiedad por toda la región: sin embargo, ninguna autoridad provincial relacionó este aumento de la delincuencia con ningún estímulo político. Lo que ayudó a que la rebeldía campesina se encontrase con las insurrecciones absolutistas en su lucha contra el orden constitucional fue la política gubernamental relativa a los impuestos y a las quintas⁵⁵.

A finales de 1822 los facciosos de la zona oriental de Cantabria intentaron preparar un ejército realista. Para ello recurrieron al reclutamiento de mozos que, al huir de los sorteos de quintas, se integraban en el bando rebelde⁵⁶. En efecto, muchos mozos prefirieron fugarse antes que participar en el sorteo, e incluso algunos fueron llevados a la fuerza por los “facciosos”. Así pues, la población rural se encontró entre dos bandos que les exigían contribuciones, ante lo cual adoptaron dos posturas, bien una actitud pasiva con ambos, bien una inclinación hacia el bando que controlaba el terreno, es decir hacia el bando faccioso (al unirse a las filas rebeldes no debían pagar nada a nadie y podían robar con total impunidad). Las quintas permitieron el estrechamiento de los lazos entre el realismo y el malestar del campo montañés contra el

⁵³*Ibíd.*, p. 8.

⁵⁴*Ibíd.*, p. 9.

⁵⁵*Ibíd.*, p. 10.

⁵⁶*Ibíd.*, p. 14.

Estado liberal, lo cual permitió a los realistas lograr la base social necesaria para sostener su proyecto de restauración del absolutismo⁵⁷.

Con el estallido de la Primera Guerra Carlista la mayor parte de la región se caracterizó más por la indiferencia que por el apoyo a uno de los dos bandos (excepto en los núcleos urbanos), por lo que se puede señalar que el carlismo tuvo un arraigo muy pobre en Cantabria, como demuestran los débiles apoyos sociales desde una óptica estrictamente política. Tras el fracaso de la acción de Vargas se consiguió que el foco de la rebelión en el norte de España se redujera al espacio vasco-navarro, convirtiéndose Cantabria en zona de aprovisionamiento de recursos de todo tipo para los asediados territorios vecinos⁵⁸.

Sin embargo, a partir del verano de 1837 se conoció una progresiva intensificación de la actividad carlista sobre Cantabria, que tuvo mucho que ver con la carestía de alimentos de aquél verano y otoño en el campo montañés, la cual llevó a la miseria y a la delincuencia a un campesinado empobrecido tras cuatro años de guerra⁵⁹.

¿Cuál fue la base social de la contrarrevolución en Cantabria?

Vicente Fernández analiza la base social del movimiento faccioso durante esos dos periodos de guerra y observa algunos elementos particulares. Durante el Trienio Liberal, la primera iniciativa anticonstitucional corresponde a miembros del clero (sobre todo del regular y del vinculado al patrimonio de las parroquias): la Iglesia participó a través de la incitación a la insurrección y su justificación religiosa, más que con su contribución humana o material⁶⁰. A partir de 1822 los principales protagonistas de la protesta social eran jóvenes que huían de los sorteos de quintas y desheredados de la tierra. Además, la insurrección popular no se trataba de un movimiento acéfalo, pues en algunos casos las oligarquías locales y el clero lograron dirigirla hacia el objetivo concreto del realismo. Sin embargo, el carácter de protesta social del movimiento faccioso durante el Trienio fue evidente, como se refleja en los primeros meses de la vuelta del absolutismo, cuando se intentó integrar no sin dificultades a aquellos facciosos en las filas del ejército realista⁶¹.

⁵⁷*Ibíd.*, p. 15.

⁵⁸*Ibíd.*, p. 27.

⁵⁹*Ibíd.*, p. 40.

⁶⁰*Ibíd.*, p. 47.

⁶¹*Ibíd.*, p. 48.

Durante la Primera Guerra Carlista cobraron más fuerza los agentes extraños a la dinámica provincial. Hay que señalar que la base social de los rebeldes al comienzo de esta segunda guerra civil no coincidió necesariamente con la que continuó posteriormente la lucha armada contra el orden liberal. En efecto, en los informes de los ayuntamientos sobre quienes se acogían a los indultos propuestos por la Capitanía General de Castilla La Vieja a finales de 1833 y sobre quienes permanecían en la facción se observa que entre los primeros abundan los labradores, término muy amplio pero que implica la propiedad de tierra, y entre los segundos encontramos hacendados conocidos por sus ideas absolutistas e individuos sin bienes. Tras el fracaso de la insurrección, la oposición armada al régimen isabelino en este primer periodo de la guerra quedaría reducida a los pobres marginados y sin tierras⁶².

Así, en las respuestas de los ayuntamientos en 1838 y 1839 queda manifiesto que la mayoría de los facciosos cántabros eran jóvenes solteros, sin tierras, ocupados en tareas artesanales o jornaleros; dentro de la población rural estaban los campesinos inmovilizados por las obligaciones familiares y un pedazo de tierra, que aunque no participaron activamente en la lucha armada (por el temor a perder sus bienes) sí se convirtieron en los encubridores y confidentes de los rebeldes⁶³.

Por lo tanto, puede decirse que aunque haya un único movimiento de oposición al Estado liberal, el realismo-carlismo, también es cierto que no se puede hablar de un único grupo social que lo sustente, si no que se caracteriza por la heterogeneidad social. Existía una dirección política formada por los elementos procedentes de los antiguos grupos privilegiados que dirigían la lucha con vistas a la vuelta del absolutismo. La actividad facciosa organizada estaba en relación directa con la reacción a los cambios por parte de las oligarquías locales, que eran los auténticos líderes de las comunidades rurales. En un segundo nivel estaba la tropa, formada por el campesinado pobre y los desheredados, quienes encontraron en la organización de aquellos la infraestructura necesaria para visibilizar su protesta⁶⁴.

¿Qué llevó al clero y a la nobleza a oponerse al orden liberal?

Una de las raíces de los enfrentamientos contra el orden liberal procede de la transformación de las estructuras económicas tradicionales en el tránsito al sistema capitalista apoyado por la

⁶²*Ibíd.*, pp. 48-49.

⁶³*Ibíd.*, p. 53.

⁶⁴*Ibíd.*, p. 54.

burguesía mercantil santanderina. Pero la implantación del régimen constitucional no sólo amenazaba los aspectos económicos tradicionales, sino también y fundamentalmente unos modos de vida fuertemente imbricados en la población rural. Así pues, los dos sistemas que se enfrentaron vivían en mundos separados (aunque con fuertes interacciones): el capitalismo se desarrolló en los núcleos urbanos de la provincia, fundamentalmente en Santander, gracias a la actividad comercial generada con el campo castellano y las colonias; por otro lado, asistimos a una profunda crisis en el campo provocada por la paulatina disolución de las estructuras agrarias tradicionales y los desastres sufridos por la Guerra de Independencia⁶⁵.

Ante esta situación de miseria el campesinado no encontró alternativas para solucionar sus problemas materiales ni en el programa liberal ni en las propuestas absolutistas. Sin embargo, la acción del clero, el monopolio del poder local por parte de las oligarquías municipales, un código cultural afín a los reaccionarios políticos y la relación que se estableció entre Santander, liberalismo y riqueza por un lado, y el mundo rural y la miseria por otro, llevan a Vicente Fernández a integrar al campesinado en la contrarrevolución absolutista. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todo el mundo rural era contrario a las políticas económicas liberales, pues la mayor parte de los miembros de dichas oligarquías tenían intereses económicos en la capital, por lo que parece difícil que apoyasen movimientos insurreccionales en contra de sus intereses.

En primer lugar, señala que la actitud del *clero* fue provocada por las agresiones que sufrió contra su status económico por parte de los gobiernos liberales⁶⁶. Aunque el propio autor reconoce la carencia de estudios sobre la cuantía de los bienes de la Iglesia a comienzos del siglo XIX, afirma tener la certeza de que eran abundantes en el caso de los monasterios⁶⁷, punto sobre el que profundizaremos más tarde cuando se detallen los procesos desamortizadores de la primera mitad del siglo XIX en Cantabria.

La situación material de la Iglesia montañesa no fue ajena al desarrollo de los nuevos recursos económicos que generaba la actividad del puerto de Santander y a los inicios de una leve enajenación de los bienes eclesiásticos; así, en 1801 se decretó el pago al rey de 500.000 reales por parte de la diócesis santanderina en concepto del noveno concedido por Pío VII a Carlos IV (sin embargo, la pobreza de la diócesis quedó demostrada al conceder el monarca la

⁶⁵*Ibíd.*, pp. 55-56.

⁶⁶*Ibíd.*, p. 56.

⁶⁷*Ibíd.*, p. 57.

exención de la contribución)⁶⁸. Vicente Fernández sostiene que durante la Guerra de Independencia se produjeron muchas pérdidas materiales, incluyendo saqueos de conventos y la obligación de hacer aportaciones en metálico. Además, la actividad legislativa de José I Bonaparte y la de la Junta Central y las Cortes de Cádiz se marcaron como objetivo la reducción del poder de la Iglesia, recurriendo a la exclaustración y a la desamortización. En 1814 Fernando VII anuló las leyes constitucionales y se devolvieron los bienes eclesiásticos a sus antiguos poseedores⁶⁹.

Con el inicio del Trienio se procedió a favorecer la secularización del clero, intentando sacar de los conventos a quienes hubiesen entrado huyendo de la pobreza o del trabajo. En este periodo sitúa Vicente Fernández la supresión de numerosos conventos, aunque también afirma que la rápida caída del régimen liberal en 1823 impidió que el proceso desamortizador fuese muy activo; como se ha indicado un poco más arriba, todos estos aspectos se tratarán más en detalle en el apartado correspondiente, donde se podrá comprobar el verdadero peso y alcance de la enajenación de bienes eclesiásticos en dicho periodo. La vuelta de Fernando VII al absolutismo provocó de nuevo la vuelta a la legislación anterior y la devolución a las comunidades religiosas de los conventos y los bienes desamortizados. Será en la regencia de María Cristina cuando se culmine el proceso de exclaustración (sobre todo, a partir de mediados de 1835) y, en menor medida, el de desamortización⁷⁰.

Sin embargo, no todos los males le vinieron al clero del liberalismo, pues también sufrió la crisis agrícola y las de subsistencias que asolaron la región durante el primer tercio del siglo XIX, como las sufrieron todos aquellos que vivían directa o indirectamente de la producción del campo. Así todo, al empobrecimiento general provocado por la coyuntura económica del momento Vicente Fernández suma, en el caso del clero, una legislación liberal especialmente agresiva hacia sus intereses materiales⁷¹.

La Iglesia cántabra estuvo desde la Guerra de Independencia muy vinculada a la figura de Fernando VII, y llegó a constituirse en la base más firme para la restauración del absolutismo. Esto no impidió que en 1820 las jerarquías eclesiásticas aceptaran prudentemente los cambios políticos, aunque al mismo tiempo animaran a los párrocos a restablecer la Inquisición y

⁶⁸*Ibíd.*, p. 58.

⁶⁹*Ibíd.*, p. 59.

⁷⁰*Ibíd.*, p. 60.

⁷¹*Ibíd.*, p. 65.

desobedecer la legislación liberal⁷². Los curas anticonstitucionales menudearon por toda la región, protestando por la reducción del diezmo (la cual asociaban a la pobreza que padecían) y mostrando su oposición a una política gubernamental antieclesiástica. Así, fue el clero el primero que reaccionó contra el nuevo sistema: sin embargo, el número de clérigos integrados en partidas armadas realistas es muy reducido (mientras en otros lugares, como hemos visto en el caso de Aragón, participaban directamente en las asonadas), por lo que su papel se centró en el encubrimiento y el azuzamiento de los ánimos desde el púlpito contra el orden constitucional⁷³. En la Primera Guerra Carlista ya vemos un mayor número de curas carlistas, sobre todo párrocos, capellanes y frailes con inclinaciones políticas absolutistas que se unían a las partidas rebeldes⁷⁴.

Hay que tener presente que el papel del clero en la comunidad campesina era muy importante, pues en ocasiones eran los verdaderos gobernantes de los pueblos, pues además del prestigio social y moral que poseían, también tenían la capacidad de controlar a las autoridades municipales⁷⁵. Además, el papel del clero fue fundamental a la hora de legitimar la costumbre, el orden social tradicional; nos encontramos ante comunidades de agricultores ritualistas, que utilizaban técnicas y sistemas de cultivo tradicionales y que repetían unos ciclos monótonos sin ningún control sobre los fenómenos naturales: era fundamental la idea de permanencia en el orden normal, rechazando cualquier tipo de movilidad o alteración del mismo⁷⁶. Esto puede ayudar a comprender por qué calaron entre unos campesinos alejados de las luchas políticas, los argumentos antiliberales utilizados por los absolutistas para justificar su reacción política y por el clero para reclamar su antigua situación privilegiada⁷⁷.

En cuanto a la *nobleza*, debemos partir de que dicho concepto tuvo un significado muy amplio, pues incluye a gente sin títulos, propiedades y en situación de pobreza (la llamada “nobleza de estado”), que podía ejercer trabajos artesanales o agrícolas. La gran nobleza en Cantabria era absentista⁷⁸. En un nivel inferior se encuentra un grupo asentado en la región que se acercó a la causa liberal al haberse adaptado a las actividades económicas y mercantiles que venían desarrollándose en Santander; a este nivel se pueden integrar los

⁷²*Ibíd.*, p. 69.

⁷³*Ibíd.*, pp. 71-72.

⁷⁴*Ibíd.*, p. 80.

⁷⁵*Ibíd.*, p. 84.

⁷⁶*Ibíd.*, p. 85.

⁷⁷*Ibíd.*, p. 87.

⁷⁸*Ibíd.*, p. 87.

burgueses santanderinos que se ennoblecieron buscando el prestigio social del que carecían por nacimiento⁷⁹.

El sector de la nobleza que se opuso al régimen liberal fue, para Vicente Fernández aquél que no supo o pudo integrarse como propietario en el nuevo orden social. Los principales componentes de este sector fueron las oligarquías locales o comarcales, viéndose una relación entre su oposición a las novedades liberales y el grado de arraigo del carlismo en sus pueblos. El poder de estas oligarquías locales no sólo se basaba en la posesión de las mejores tierras y en la ordenación de la agricultura tradicional, sino también en que eran acreedores de censos, a los que el campesinado tenía que recurrir ante las sucesivas crisis de subsistencia. Además, hay que decir que estas oligarquías incluían al clero rural y que controlaban la vida municipal gracias a las antiguas ordenanzas municipales y el sistema de concejos⁸⁰. Sin embargo, como se ha dicho anteriormente, no se puede meter en el mismo saco del antiliberalismo a todos los miembros de las oligarquías locales, pues muchos de ellos tenían negocios que se veían beneficiados por las políticas económicas liberales.

Por otro lado, muchos de estos caciques poseían pequeños mayorazgos, y su condición de prestamistas y de propietarios de tierras arrendadas les permitió llevar una vida ociosa, erigiéndose en el principal obstáculo para la integración del campo en el mercado y para la introducción de mejoras en la producción⁸¹. Del control que ejercían sobre la vida política y administrativa de los municipios viene su virulento rechazo a la supresión de las ordenanzas municipales por parte de los liberales. A ello hay que añadir que tras el enriquecimiento que experimentaron en el siglo XVIII gracias a su condición de propietarios de las mejores tierras y al aumento demográfico (que provocó un aumento de la renta de la tierra y de los precios), con la llegada del nuevo siglo, la Guerra de la Independencia, la crisis agrícola correspondiente y el freno de las salidas de población del campo hacia América o hacia otras actividades como las ferrerías o la arriería, se encontraron ante unas fuertes contradicciones dentro de la sociedad rural tradicional.

Desde la Guerra de Independencia se abre un proceso de liquidación de los bienes de propios y comunales de los ayuntamientos, lo cual afectaba tanto a la población rural pobre, que veía opciones de acceder a los terrenos comunales, como a los caciques, que veían peligrar su

⁷⁹*Ibíd.*, p. 88.

⁸⁰*Ibíd.*, p. 89.

⁸¹*Ibíd.*, p. 90.

posición en la sociedad⁸². La propia guerra ayudó a que gran cantidad de bienes municipales pasasen a manos privadas, aunque no el sentido en que podían desear las iniciativas legislativas liberales. En efecto, muchos ayuntamientos, azotados por las exacciones de ambos ejércitos, malvendieron ilegalmente parte de sus bienes, y los compradores no fueron otros, según el autor, que los caciques locales, aunque a la luz de investigaciones posteriores se ha sabido que los principales beneficiarios de las superficies enajenadas durante esta época fueron los miembros de la burguesía santanderina⁸³

Aunque la llegada al poder de Fernando VII anuló la legislación liberal anterior y se promovió la devolución de los bienes enajenados al común, en la práctica no llegó a materializarse. De nuevo el inicio del Trienio Liberal trajo consigo la subasta de gran cantidad de baldíos y propios, lo cual materializó una confrontación entre la población campesina que no pudo acceder a su compra y perdió un importante recurso para su supervivencia, y unos caciques que vieron aumentar su patrimonio⁸⁴. Durante la segunda etapa absolutista se llevaron a cabo ocupaciones ilegales de fincas legalizadas por el monarca.

La vuelta del liberalismo durante la regencia de María Cristina revalidó todas las enajenaciones de fincas de propios, comunes y baldíos hechas durante la Guerra de Independencia, legalizando todas las ocupaciones, siempre a favor de los caciques locales⁸⁵.

A pesar de ello, los liberales no lograron el objetivo político que perseguían con estas medidas, que no era otro que el de atraerse a las oligarquías locales. En efecto, los caciques no aprovecharon las tierras adquiridas para aumentar su producción, ya que no había una demanda efectiva de sus productos: lo único que hicieron fue adquirir buenas tierras a un precio bajo⁸⁶. Por su parte, los liberales olvidaron sus proyectos de reparto de los comunales entre los no propietarios para realizar una verdadera reforma agraria, por lo que la defensa del sistema comunal sería adoptada por los carlistas, logrando integrar en las filas de la contrarrevolución al campesinado pobre⁸⁷.

En este punto es conveniente señalar que con la restauración del absolutismo en 1823, tampoco las oligarquías locales mostraron un gran entusiasmo, principalmente por el hecho de

⁸²*Ibíd.*, p. 91.

⁸³ SÁNCHEZ GÓMEZ, M. A., *La desamortización en Cantabria durante el siglo XIX (1800-1889)*, Santander, Ayuntamiento de Torrelavega, 1994, pp. 45-46, pp. 135-141, pp. 195-220.

⁸⁴FERNÁNDEZ BENÍTEZ, V., *op. cit.*, p. 92.

⁸⁵*Ibíd.*, p. 93.

⁸⁶*Ibíd.*, p. 94.

⁸⁷*Ibíd.*, p. 95.

que no se derogase la abolición de las antiguas ordenanzas municipales (auténtico baluarte del poder político y administrativo de los caciques a nivel municipal) y porque tampoco veían que la crisis económica del campo montañés pudiese solucionarse gracias a los postulados económicos contrarrevolucionarios. Los caciques no apoyaron ni a unos ni a otros, sino que permanecieron a la expectativa, lo cual permitió a los carlistas campar a sus anchas por la región sin la oposición de las autoridades municipales⁸⁸.

Por lo tanto, según Vicente Fernández, la participación del clero y la nobleza en los movimientos contrarrevolucionarios fue diferente. Por un lado, el clero se vio agredido por las políticas liberales, sobre todo por las desamortizaciones, y se convirtió en el principal instigador y encubridor de las insurrecciones que se llevaron a cabo durante el Trienio Liberal en Cantabria; con el estallido de la Primera Guerra Carlista incluso hay miembros que participaron directamente en los combates contra los isabelinos. Por su parte, la heterogeneidad de un grupo tan amplio como era el de la pequeña nobleza montañesa, provocó que se mostraran distintas posturas hacia el liberalismo, desde el apoyo por parte de aquellos que tenían intereses comerciales y económicos en Santander, al rechazo de quienes no fueron capaces de integrarse como propietarios en el nuevo orden social, pasando por la indiferencia de otros que se mantuvieron a la expectativa y no tomaron partido por ninguno de los dos bandos.

¿Qué llevó a los campesinos a unirse al movimiento contrarrevolucionario?

La participación del campesinado pobre en la contrarrevolución le dio un componente social a la misma, superando los planteamientos políticos que pudieran haberla motivado. Dicha participación hay que relacionarla con el deterioro de su situación material durante el primer tercio del siglo XIX, provocado por las progresivas crisis de subsistencias de tipo antiguo y por unas políticas liberales que ignoraron los intereses de este campesinado pobre⁸⁹.

Como se ha dicho antes, durante el siglo XVIII se experimentó un importante crecimiento demográfico en la región, aunque se aprecian diferencias espaciales⁹⁰. El autor sostiene que en el occidente y el centro una emigración endémica de miseria era la única válvula de escape que eliminaba el sobrante de población, mientras que en Santander y el oriente de la región

⁸⁸*Ibíd.*, pp. 96-97.

⁸⁹*Ibíd.*, p. 100.

⁹⁰*Ibíd.*, p. 101.

encontramos a ese sobrante como mano de obra ideal que permitiría incentivar una incipiente actividad industrial (molinos harineros, fábricas textiles, cerveceras, astilleros, ferrerías, etc.)⁹¹. Sin embargo, posteriores estudios demográficos han demostrado que en la zona occidental y central de Cantabria la emigración era selectiva, pues eran reclamados a Cádiz jóvenes sin ninguna preparación (para efectuar trabajos no especializados) y de familias determinadas (muchas veces parientes de aquellos que habían emigrado anteriormente), mientras que en la zona oriental apenas hubo emigración porque los hijos continuaban con los oficios de los padres y no había necesidad de salir en busca de mejores condiciones de vida⁹².

Vicente Fernández sostiene que el crecimiento económico del siglo XVIII, de haber superado los factores extraños a la propia dinámica regional que provocaron su frenazo, habría colapsado por razones internas, principalmente por el agotamiento de la materia prima energética que alimentó a la mayor parte de las empresas que trabajaron en la región, la madera. Además, dicho crecimiento económico no fue acompañado de una transformación de la economía rural tradicional, totalmente ajena a las novedades económicas del siglo. Si bien es cierto que hay un aumento de la producción, éste fue provocado por la introducción de un nuevo cereal, el maíz, y la extensión de las roturaciones a costa de terrenos comunales. Al no existir cambios de fondo en la estructura económica agraria, la fragilidad del crecimiento económico quedó a la vista a finales del XVIII y comienzos del XIX con una sucesión de crisis de subsistencias⁹³.

Los efectos de estas crisis se plasmaron en un empobrecimiento general (más agudo donde hubo enriquecimiento en el siglo XVIII), lo cual unido a las consecuencias de la Guerra de Independencia, trajo consigo una descapitalización del campo y una posible paralización del movimiento migratorio, lo cual hizo tocar fondo a la crítica situación material del campesinado. Así pues, la reacción del campesinado está intrínsecamente relacionada con el comportamiento que tenían los mismos contra las endémicas crisis de subsistencias que venían sufriendo durante todo el Antiguo Régimen. En efecto, el excedente de población agrícola en proceso de proletarización que quedó desocupado tras el declive del crecimiento económico, no pudo ser absorbido por la emigración⁹⁴. La roturación de terrenos concejiles para compensar el excedente de población no fue suficiente, a lo que hay que unir la

⁹¹*Ibíd.*, p. 102.

⁹² SÁNCHEZ GÓMEZ, Miguel Ángel, “Dinero viajero. Censos hipotecarios y emigración, un binomio inseparable en la Cantabria del siglo XVIII”. Comunicación presentada al XVI Congreso de la Asociación de Demografía Histórica (Cádiz, 21 al 24 de junio de 2016). Inédita.

⁹³FERNÁNDEZ BENÍTEZ, V., *Op. cit.*, p. 106.

⁹⁴*Ibíd.*, p. 107.

destrucción de los bosques, que eran una de las piezas fundamentales en el funcionamiento de la economía campesina tradicional, pues en ellos (al igual que en los baldíos y tierras comunales) encontraba el campesinado un asa donde agarrarse en momentos de penuria⁹⁵. Este hecho llevó a que los campesinos viesen en las fábricas un rival con el que competir en el aprovechamiento forestal⁹⁶.

Se puede diferenciar la respuesta del campesinado a esta situación en función de las distintas comarcas. Así, en el centro y oriente de la región asistimos a un empobrecimiento tras el auge económico del siglo XVIII, lo cual supone que la protesta campesina en estas zonas fuese de una naturaleza distinta a la de la zona occidental: no respondía a una reacción frente a una crisis de subsistencias, sino que era una plasmación de la ruptura del crecimiento económico anterior. Hay mayor actividad durante las dos guerras civiles en las zonas empobrecidas, por lo que se relaciona empobrecimiento y contrarrevolución⁹⁷. Esto coincide con lo que señala Josep Fontana, cuando relaciona carlismo con zonas empobrecidas, no con zonas pobres⁹⁸. Es decir, se inclinó hacia la contrarrevolución aquel campesinado que había conocido cierto grado de prosperidad en el siglo anterior, y que fue testigo del desmoronamiento de un endeble crecimiento económico⁹⁹. Al desaparecer, según el autor, la válvula de escape de la emigración, el excedente de población amenazado por la miseria optó por el robo y la conflictividad, lo cual sería aprovechado por la oposición absolutista para dotar al movimiento contrarrevolucionario de una base social de la que carecía¹⁰⁰.

⁹⁵ *Ibíd.*, p. 108.

⁹⁶ *Ibíd.*, p. 109.

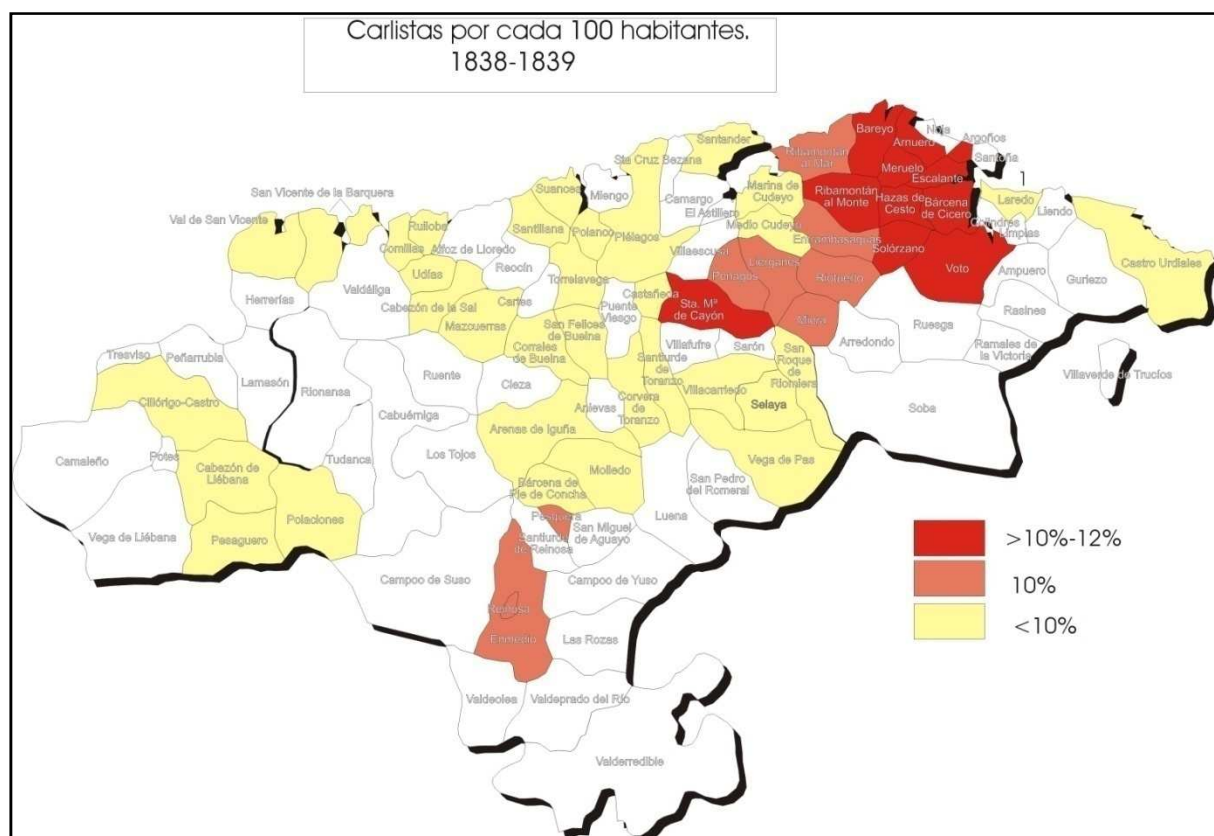
⁹⁷ *Ibíd.*, p. 110.

⁹⁸ FONTANA, J., *op. cit.*, p. 15.

⁹⁹ FERNÁNDEZ BENÍTEZ, V., *Op. cit.*, p. 111.

¹⁰⁰ *Ibíd.*, p. 112.

MAPA 1



Además del empobrecimiento y deterioro económico al que se vio sometido gran parte del campesinado cántabro a comienzos del siglo XIX, hay otros factores de descontento que, según Vicente Fernández, empujaron a dicho grupo social a abrazarse a la causa reaccionaria y oponerse al nuevo orden liberal. En este sentido habría que destacar los nuevos sistemas de reclutamiento militar, que superaban las antiguas exenciones asociadas al título de hidalgo, tan extendido en la región¹⁰¹. Así, a partir del Trienio Liberal se comienzan a generalizar las quintas, un reclutamiento anual y obligatorio entre los todos los jóvenes con una duración de cinco años (124 jóvenes en 1822), aunque el conflicto realista trajo consigo repartos extraordinarios que incrementaron sustancialmente el número de llamados a filas. Aunque tras

¹⁰¹ *Ibíd.*, p. 112.

la vuelta al absolutismo hubo algún sorteo ocasional, hay que señalar que durante la época del Estatuto Real se recuperó el sorteo anual, al tiempo que se facilitaba la celebración de reclutamientos extraordinarios¹⁰².

Las necesidades de la Primera Guerra Carlista provocaron una auténtica sangría, incluso con tres reclutamientos en un año, a los que no podía hacer frente una población que tenía a sus jóvenes sorteables integrados en alguna fuerza militar o huidos. Además, las condiciones del servicio militar y la alta mortalidad hacían que no fuese considerada como una opción de vida, sino como una pesada obligación¹⁰³. Si bien es cierto que la nueva situación superó las exenciones gratuitas de los privilegiados, también es verdad que se abrió la opción a la redención del servicio militar por dinero, quedando la defensa física del Estado en manos de los no propietarios¹⁰⁴. El rechazo a los alistamientos se manifestó en la emigración de jóvenes fuera de la región para evitar ser sorteados, incluso algunos optaron por declararse prófugos o por desertar una vez realizado el sorteo. Esa nueva condición al margen de la ley hizo que estos jóvenes buscasen acomodo dentro del movimiento faccioso¹⁰⁵.

Otra de las causas que provocó el descontento del campesinado fue la presión fiscal a la que fue sometido desde diferentes instancias. En primer lugar asistimos a un descenso en la recaudación de los diezmos, el cual no se debe sólo a la secular resistencia campesina a su pago, sino que está íntimamente relacionado con las consecuencias que sufría la agricultura regional por efecto del crecimiento urbano de Santander y de las actividades mercantiles del siglo XVIII. Aún así, la Iglesia utilizaba su prestigio espiritual y capacidad de llegar hasta el campesino para evitar que aquellos impuestos dejasen de pagarse¹⁰⁶. Aunque hubo un descenso en la recaudación diezmal, hay que señalar que en la provincia de Santander fue menos acusado. Ello está vinculado al grado de comercialización de la producción agraria; en las zonas donde dominaba la producción para el mercado, el pago era más gravoso para los campesinos que donde se cultivaba para el propio consumo¹⁰⁷. Aún así, la recaudación de los diezmos no fue visto por los campesinos como una carga onerosa a eliminar, como ocurriría con la nueva fiscalidad liberal¹⁰⁸.

¹⁰² *Ibíd.*, p. 113.

¹⁰³ *Ibíd.*, p. 114.

¹⁰⁴ *Ibíd.*, p. 116.

¹⁰⁵ *Ibíd.*, p. 118.

¹⁰⁶ *Ibíd.*, p. 124.

¹⁰⁷ *Ibíd.*, p. 125.

¹⁰⁸ *Ibíd.*, p. 126.

Una de las grandes preocupaciones de los gobiernos tras el regreso de Fernando VII en 1814 fue la reforma del sistema tributario. En efecto, en pleno Sexenio Absolutista se decreta el establecimiento de una única contribución directa, general y proporcional a las riquezas, que creó un descontento popular que veía una posible disminución de la presión fiscal del Estado con la llegada al poder de los liberales¹⁰⁹. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, pues se mantuvieron todas las contribuciones anteriores a 1820, a las que se añadieron nuevos impuestos provinciales y municipales, que debían hacer frente a los numerosos gastos derivados de la nueva división administrativa en ayuntamientos¹¹⁰. Así pues, si la presión fiscal pudo ser un motivo de apoyo a la revolución de 1820, lo cierto es que dos años más tarde fue uno de los principales reclamos de los realistas para recoger el apoyo popular para combatir al orden liberal¹¹¹. A partir de 1833, la presión fiscal se vio agravada por las necesidades de la guerra. En efecto, durante la Primera Guerra Carlista se multiplican las contribuciones extraordinarias, que incidieron en una población económicamente exhausta¹¹².

En estrecha relación con el asunto de la guerra, teniendo en cuenta que Cantabria era una zona de conflicto, estaba el problema de las exacciones; es decir, de los servicios, suministros y prestaciones a los que tenían que hacer frente los distintos pueblos para satisfacer a las tropas isabelinas y carlistas¹¹³. Los suministros dados por los pueblos eran teóricamente reembolsables por el Estado, responsable último del mantenimiento del ejército; sin embargo, al acabar la guerra se planteó el problema de dónde sacar los fondos para amortizar aquellas deudas de guerra¹¹⁴.

Por lo tanto, según Vicente Fernández, la presión fiscal, las exacciones, el rechazo a los sorteos de quintas, las crisis de subsistencias, y los desastres propios de la guerra, dejaron al campesino montañés en una precaria situación material que le llevó a emigrar bien hacia la capital, bien a otras regiones del sur (aunque el propio autor sostenga en otro pasaje del libro que había desaparecido la válvula de escape de la emigración)¹¹⁵ o a integrarse en el movimiento faccioso del lado de los contrarrevolucionarios¹¹⁶. Para dejar claro el peso de la emigración en la época se procederá más adelante a mostrar los resultados obtenidos al

¹⁰⁹*Ibíd.*, p. 127.

¹¹⁰*Ibíd.*, p. 128.

¹¹¹*Ibíd.*, p. 130.

¹¹²*Ibíd.*, p. 131.

¹¹³*Ibíd.*, p. 134.

¹¹⁴*Ibíd.*, p. 136.

¹¹⁵*Ibíd.*, p. 112.

¹¹⁶*Ibíd.*, p. 133.

respecto de los Censos de Policía de 1824 de diversas comarcas cántabras con distintos niveles de aceptación de los movimientos contrarrevolucionarios.

Por último, se analizan las crisis de subsistencias como elemento de imbricación entre el movimiento contrarrevolucionario realista-carlista y la protesta del campesino pobre. Durante 1821 ciertas circunstancias climatológicas generaron una situación crítica que llevó la miseria a gran parte de la población rural montañesa: larga sequía, granizadas, escasez de agua y calor, arruinaron las cosechas y facilitaron la sucesión de incendios y plagas¹¹⁷. Todo ello provocó el aumento de la mortalidad y de los precios de los alimentos de primera necesidad, lo cual fue seguido de un notable incremento de la actividad delictiva, sobre todo de robos de pequeñas cantidades de dinero, ropa o comida¹¹⁸. Poco podían hacer las autoridades provinciales para controlar esta situación, a lo que hay que unir la ineficacia de las milicias locales y la pasividad de las autoridades municipales¹¹⁹.

Aunque estos delincuentes no se movían por ningún impulso político, lo cierto es que pronto se pusieron a luchar en el mismo sentido que pretendían los absolutistas, es decir, con el objetivo de acabar con el orden constitucional¹²⁰. Las autoridades liberales no se encontraron ante una fuerza organizada, disciplinada y coordinada, sino ante unas partidas que se convirtieron para el campesinado pobre en un medio para ganarse la vida (mediante el robo de dinero y alimentos) y para librarse de los sorteos de quintos: esto llevó a la burguesía liberal santanderina a identificar realismo con bandolerismo¹²¹.

Con la vuelta del absolutismo en 1823 hubo que integrar a esas partidas armadas en el orden restablecido, y para ello se creó el cuerpo de Voluntarios Realistas, donde, según Vicente Fernández, el campesinado pobre encontró acomodo, pues aparte de ofrecerle un jornal diario seguro, le ofreció insertarse en un movimiento antiliberal que se constituyó en una auténtica amenaza social, totalmente organizado, armado y constituido como fuerza paramilitar¹²². Sin embargo, esta afirmación habría que matizarla al acercarnos al estudio de dicho cuerpo.

A partir del escrutinio de 53 “estados de fuerza” (partes mensuales donde se exponía el número de hombres que formaron la Quinta Brigada de Voluntarios Realistas entre 1827 y 1833, además del nivel de equipamiento y grado de instrucción), Miguel Ángel Sánchez

¹¹⁷*Ibíd.*, p. 139.

¹¹⁸*Ibíd.*, p. 140.

¹¹⁹*Ibíd.*, p. 141.

¹²⁰*Ibíd.*, p. 142.

¹²¹*Ibíd.*, p. 143.

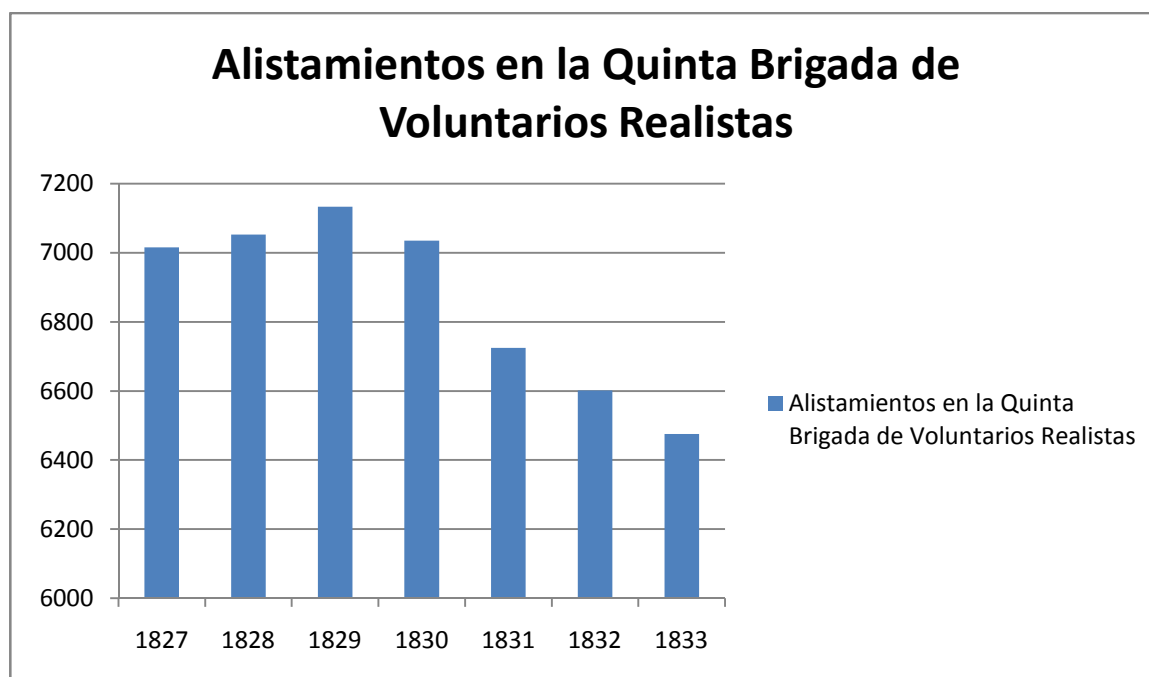
¹²²*Ibíd.*, p. 147.

Gómez obtiene unos datos reveladores de la verdadera situación numérica y material de dicho cuerpo¹²³. En cuanto al número de efectivos se advierte un progreso generalizado entre 1827 y 1829 (se pasan de 7.016 alistamientos a 7.133), para, a partir de ese momento y hasta la disolución del cuerpo comenzar un continuo declive, que se plasma en los 6.475 alistamientos de 1833. En cuanto a la situación material del cuerpo, hay que destacar que hay un alto porcentaje de soldados desarmados y sin uniforme (en 1828 hay en torno al 50% sin armas y casi un 80 % sin uniforme), cifras que disminuyen con el paso de los años (en 1833 un 45% del cuerpo está totalmente equipado), no por una mayor dotación económica, sino por el retroceso de los alistamientos. Dicha situación material incidiría fuertemente en la ineficacia de una fuerza con pocos hombres armados y uniformados¹²⁴.

¹²³ SÁNCHEZ GÓMEZ, M. A., *Sociedad y política en Cantabria durante el reinado de Fernando VII. Revolución liberal y reacción absolutista*, Santander, Ediciones Tantín, 1989, p. 100.

¹²⁴ *Ibidem*, pp.101-107.

GRÁFICA 1

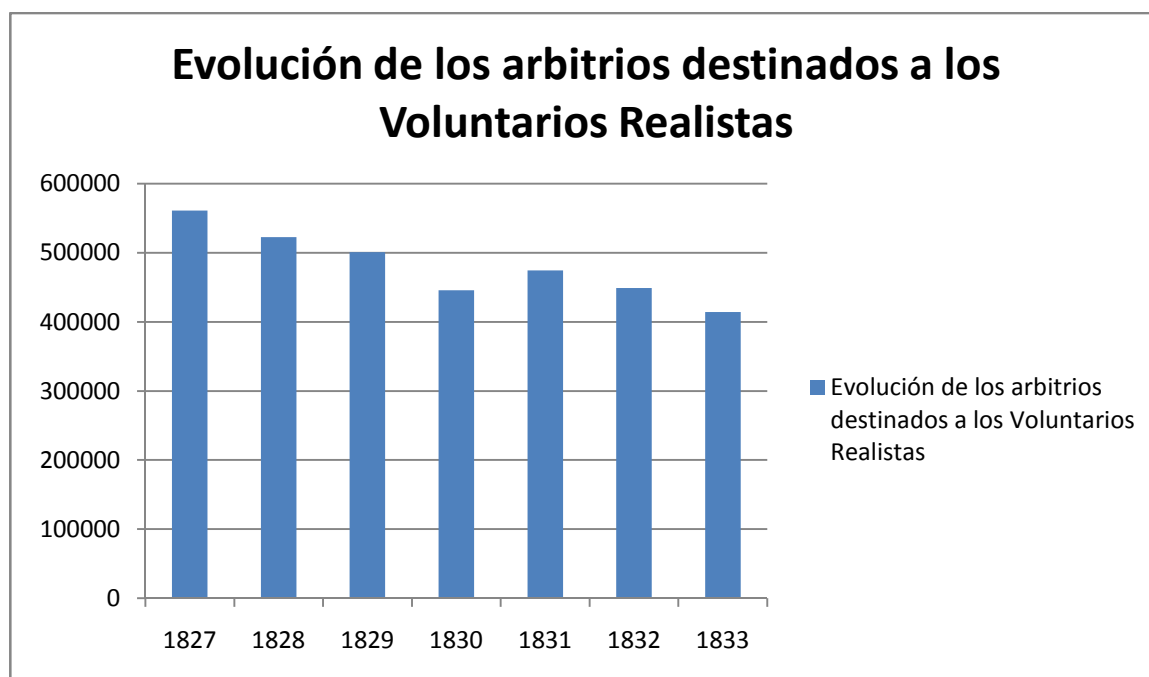


Además, hay que valorar lo gravoso que fue este cuerpo para la población civil y para los ayuntamientos, sobre quienes recayó directamente su financiación. En efecto, para los gastos burocráticos (aquellos que producía la estructura administrativa del cuerpo) se estableció una renta que debía aportar cada ayuntamiento por cada sargento, cabo y voluntario que hubiese alistado en su jurisdicción. En cuanto a los gastos destinados al equipamiento material (no sólo armamento y uniformes, sino también transporte, alquiler de edificios y caballos, reparaciones, etc.), eran sufragados con impuestos sobre productos de consumo diario (vino, aguardiente y carne, principalmente)¹²⁵. La fórmula de recaudación consistía en una subasta de los arbitrios donde se pujaba sobre su recaudación: hay que señalar que en la mayoría de las comarcas los arbitrios son rematados en una cantidad inferior a la de salida. Estos arbitrios irán descendiendo progresivamente desde 1827, con un pequeño repunte en 1831 y una posterior caída hasta 1833¹²⁶.

¹²⁵*Ibíd.*, pp. 112-113.

¹²⁶*Ibíd.*, p. 116.

GRÁFICA 2



Todo ello refleja la limitada financiación con la que contaban los Voluntarios Realistas y lo gravoso de la misma para unos ayuntamientos y una población que veían afectadas sus economías por su existencia. En efecto, cuando en 1833 se produjeron los levantamientos vascos a favor de Carlos María Isidro, en Cantabria los Voluntarios Realistas estaban en declive. La institución realista había sido abandonada por el gobierno, era rechazada por las oligarquías locales (que veían en ella un peligro social al acoger a los sectores más humildes de la sociedad) y era odiada por los ayuntamientos y los campesinos propietarios, que se resistían a mantener a aquellos voluntarios a expensas de las arcas municipales¹²⁷.

La importancia de las crisis de subsistencias en la intervención del campesinado pobre en los conflictos armados del primer tercio del siglo XIX se puede constatar también durante la Primera Guerra Carlista. En efecto, fueron fundamentales en el hecho de que la parte de población más paupérrima participara en dichos enfrentamientos fueron las crisis de 1834 y 1837. Durante el primer año se sucedieron el cólera, lluvias torrenciales, vientos huracanados

¹²⁷*Ibíd.*, p. 26.

y fuertes tormentas que provocaron grandes riadas, con las consiguientes destrucciones de cosechas, árboles y ganado; todo ello seguido de la putrefacción de animales y vegetales, que provocaría importantes fiebres y epidemias en los años centrales de la década de los treinta¹²⁸.

Así pues, vemos que durante la Primera Guerra Carlista se solapan dos importantes crisis de subsistencias con los males derivados de la propia guerra, lo cual lleva al campesinado pobre a integrarse en partidas y gavillas de ladrones cercanas al movimiento contrarrevolucionario. Una de las características principales de estos grupos es que actuaban más virulentamente entre mayo y octubre, cuando se agotaban las reservas de la cosecha del año anterior y subían los precios. Otra de las expresiones del malestar social entre el campesinado pobre fue el contrabando, con una gran tradición en Cantabria debido a su condición costera y fronteriza¹²⁹.

Una vez finalizada la guerra no sólo no se solucionaron las condiciones materiales del campesinado pobre, sino que se intensificaron las dificultades de esa parte de la sociedad que se había integrado en las partidas carlistas y que, tras el triunfo liberal volvían a casa sin oficio ni beneficio¹³⁰.

Por lo tanto, consideramos que en la única obra que ha estudiado los movimientos contrarrevolucionarios de la primera mitad del siglo XIX en Cantabria aparecen algunos aspectos que pueden ser ampliados a partir de las aportaciones de estudios posteriores y el análisis de nuevas fuentes. En este sentido, se procederá, a continuación, a arrojar más luz sobre una de las causas que atribuye Vicente Fernández al clero para protagonizar dichos movimientos: la desamortización eclesiástica. Así mismo, a partir del Censo de Policía de 1824, se intentará mostrar una imagen lo más certera posible del peso de los movimientos migratorios en la Cantabria de la época, que han sido señalados como una de las principales consecuencias de una situación económica y social insostenible.

¹²⁸ FERNÁNDEZ BENÍTEZ, V., *op. cit.*, pp. 148-149.

¹²⁹ *Ibíd.*, p. 156.

¹³⁰ *Ibíd.*, p. 158.

4. LOS PROCESOS DESAMORTIZADORES EN CANTABRIA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX

A la luz de trabajos posteriores al de Vicente Fernández Benítez se puede observar el escaso peso que tuvieron las distintas políticas desamortizadoras en la región, por lo que se puede desechar como causa fundamental en la adopción de actitudes antiliberales y contrarrevolucionarias.

A continuación, en primer lugar, se hará una sucinta evaluación del impacto que los sucesivos procesos desamortizadores tuvieron en Cantabria en la primera mitad del siglo XIX. Aunque, antes de comenzar este apartado, es importante tener presente que la gran mayoría del clero regular instalado en el territorio montaños a comienzos del siglo XIX pertenecía a la orden franciscana en su vertiente masculina (franciscanos) y femenina (clarisas), orden que, según los reglamentos escritos por San Francisco de Asís no podía poseer bienes propios ni acumular propiedades¹³¹. Además, la desamortización de una de las órdenes que más bienes podía poseer, los jesuitas, había sido hecha en 1767, con motivo de su expulsión durante el reinado de Carlos III.

Desamortización de Godoy

Partiendo del estudio de los Libros de Registro de la Caja de Consolidación (“libros de entabladuras”) conservados en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, y de numerosos protocolos notariales, Miguel Ángel Sánchez Gómez estima que durante el período 1798-1808 se enajenaron bienes en Cantabria por valor de 5.406.543 reales. Debemos tener en cuenta que los “libros de entabladuras” nos ofrecen una información muy limitada, pues no hacen referencia ni al tipo de fincas, ni a su extensión, ni a su tasación previa ni a la identidad de los compradores; esto es parcialmente corregido por los protocolos notariales, aunque también tienen sus carencias (no se reflejan las ocupaciones de los compradores ni, en algunos casos, la superficie de las fincas)¹³².

De las 749 hectáreas de fincas rústicas rematadas durante este proceso desamortizador (poco menos que la superficie del Parque de la Naturaleza de Cabárceno), casi un 60% corresponde a tierras dedicadas a cultivos cerealícolas; es más, tres de cada cuatro hectáreas enajenadas estaban cultivadas (tierras de labor, viñas o huertas), lo cual nos refleja un mundo rural

¹³¹ Como puede observarse en los capítulos 4 y 6 de la regla de la orden escrita por San Francisco de Asís y aprobada por Honorio III en 1223.

¹³² SÁNCHEZ GÓMEZ, M. A., *op. cit.*, p. 23.

anclado en el sistema económico del Antiguo Régimen¹³³. Además de estas fincas rústicas (que aportaron un 44% del total de los remates), se enajenaron 70 casas (algunas con terreno), 61 censos y varios bienes de naturaleza desconocida¹³⁴.

Los organismos (religiosos y laicos) más afectados por la desamortización fueron las capellanías, seguidas de obras pías, cofradías, ermitas, hospitales y otras fundaciones. Hay que decir que en Cantabria la implantación de la propiedad religiosa es bastante limitada, fruto de la tardía creación del obispado independiente de Burgos y de que la región no hubiese sido un territorio de reconquista¹³⁵. Como bienes propios de la Iglesia pueden considerarse las parroquias, ermitas, santuarios, luminarias, cabildos y conventos, no así las propiedades de las capellanías, cofradías, memorias, obras pías, patronatos y otras instituciones. Teniendo esto en cuenta puede concluirse que la desamortización de Godoy apenas afectó a las instituciones eclesiásticas, que aportaron unas 160 hectáreas (un 21,4% de la superficie enajenada), 3 casas y 5 censos, de todo lo cual se obtuvieron 400.000 reales (7% del total)¹³⁶.

Teniendo en cuenta el dinero desembolsado, se observa que la localización geográfica de los bienes enajenados se concentra en torno a dos zonas específicas, la comarca campurriana y los alrededores de la bahía de Santander, lo cual no es extraño, pues se trata de los dos núcleos más pujantes de la época, donde se encontraban la mayoría de los edificios y los más valiosos¹³⁷.

¹³³*Ibidem*, p. 24.

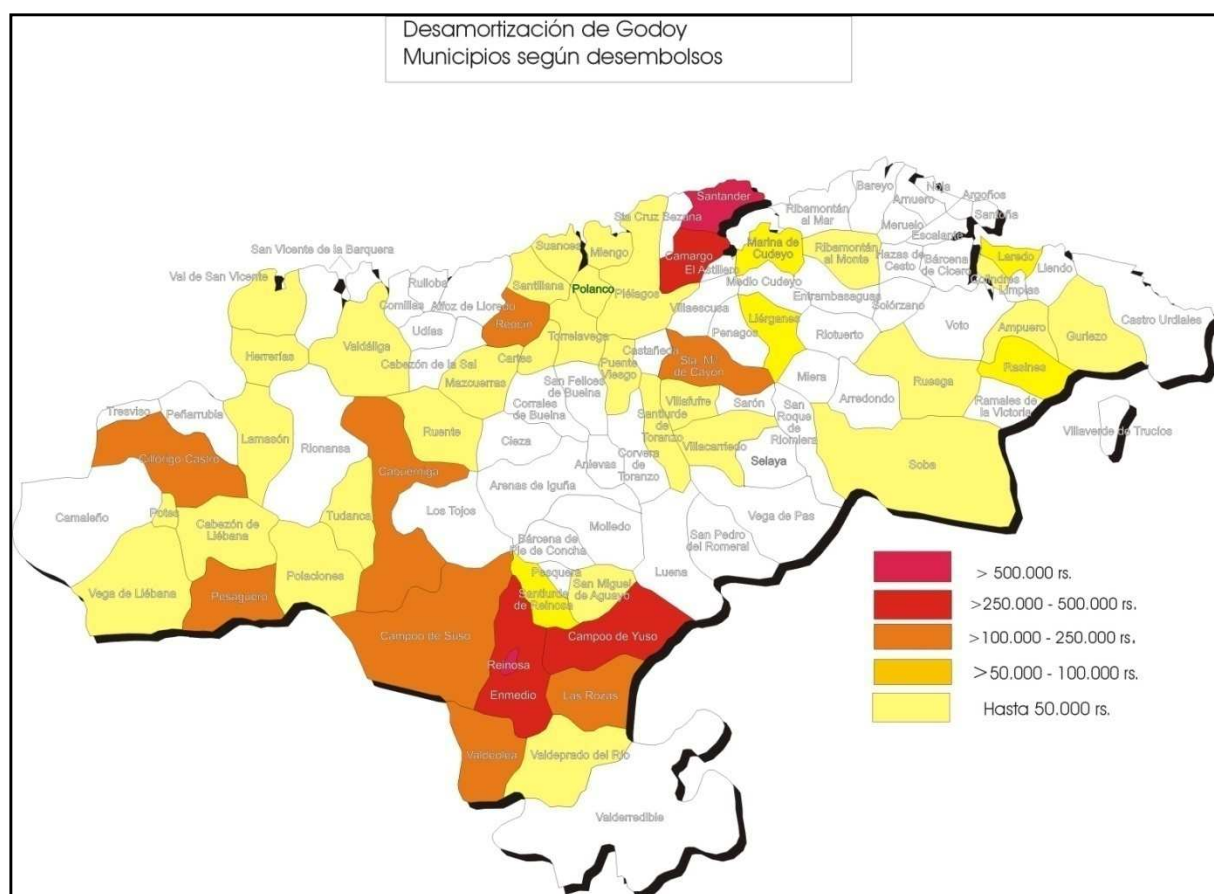
¹³⁴*Ibid.*, p. 26.

¹³⁵*Ibid.*, p. 29.

¹³⁶*Ibid.*, p. 33.

¹³⁷*Ibid.*, p. 33.

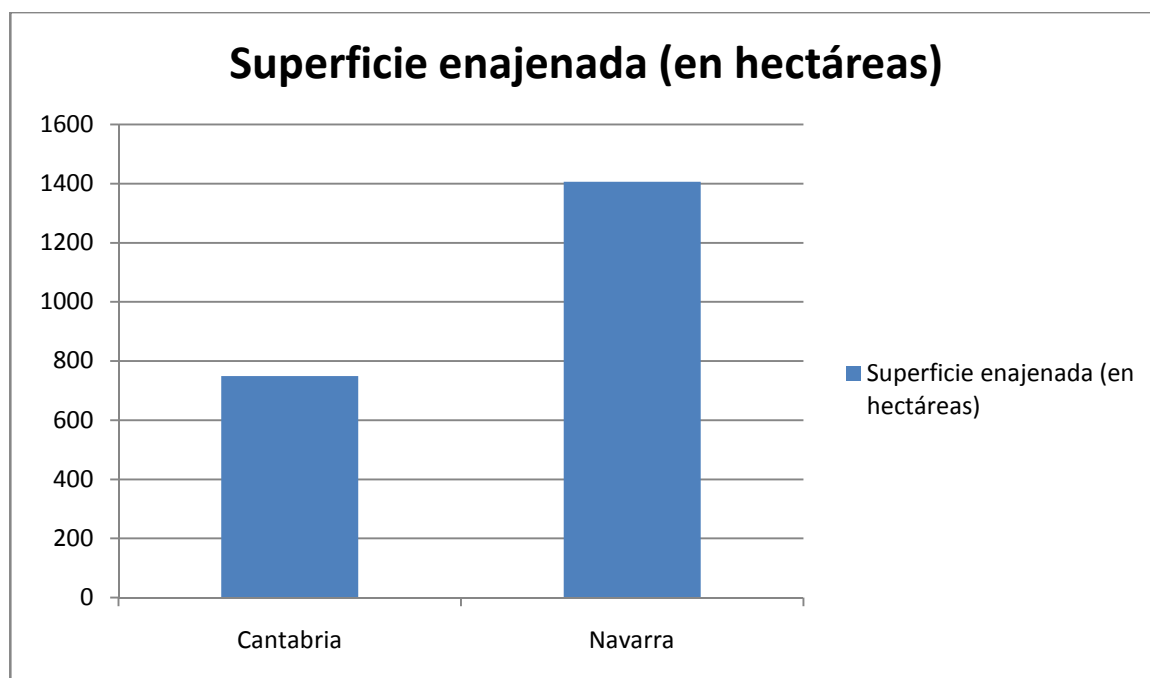
MAPA 2



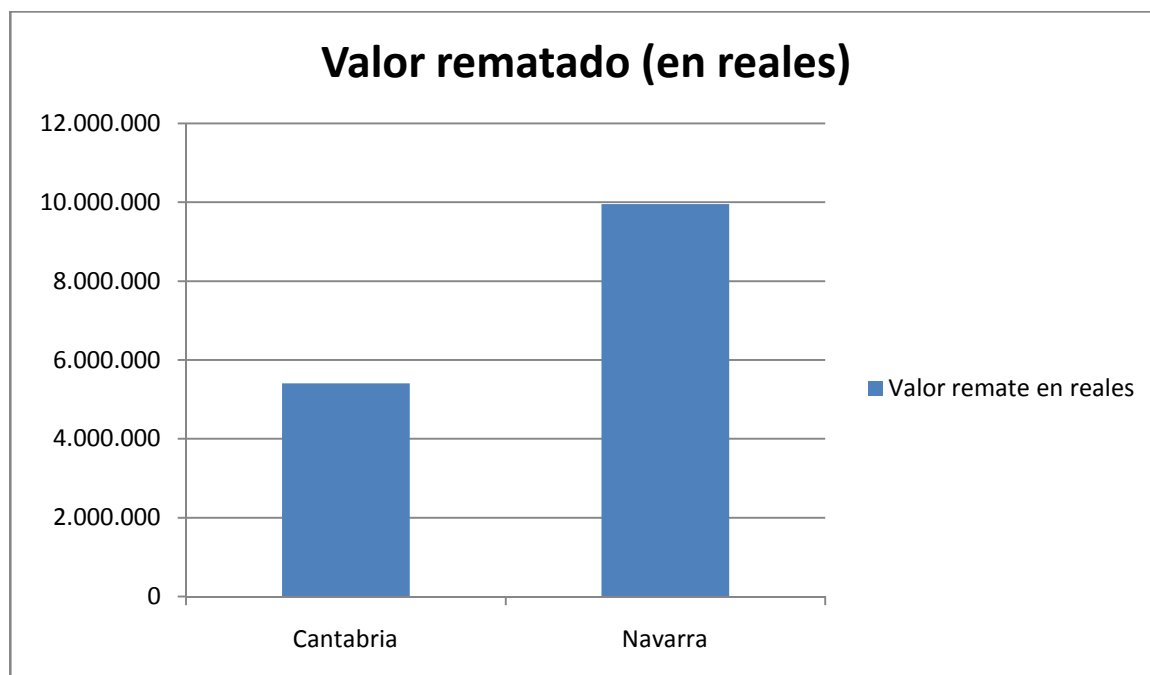
Analizando las cifras de una de las regiones donde la contrarrevolución tuvo un gran protagonismo nos encontramos con que para Navarra José María Mutiloa registra unas 1.406 hectáreas rematadas por 9.956.507 reales¹³⁸, menos del doble de lo hallado para Cantabria por Miguel Ángel Sánchez Gómez.

¹³⁸ MUTILOA POZA, J. Mª, *La desamortización eclesiástica en Navarra*, Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1972, p. 263.

GRÁFICA 3



GRÁFICA 4



Desamortización durante la Guerra de Independencia

La prolongada estancia de los franceses en Cantabria (hasta 1813) hizo que la ocupación fuese particularmente dañina para una burguesía comercial santanderina que veía afectados sus negocios, y para un campesinado que veía perder parte de sus posibilidades de supervivencia al tener que recurrir las autoridades municipales a la venta de bienes comunales y al endeudamiento para superar la presión fiscal proveniente de las tropas francesas y españolas¹³⁹. En efecto, numerosos concejos rurales soportaron una sobrecarga fiscal, que recaería fundamentalmente sobre el vecindario, ya que la libertad de comercio decretada por Napoleón rompió el monopolio que los concejos tenían sobre la venta de algunos artículos de primera necesidad (cortando así una fuente de recursos para hacer frente a las exigencias de los contendientes)¹⁴⁰. Esta exigente fiscalidad, unida a los destrozos de bienes municipales por el conflicto, provocó una disminución de los ingresos municipales y un fuerte deterioro de las condiciones de vida del vecindario, que no dudó en abandonar sus lugares de residencia y acudir a otros más seguros o con mejores expectativas económicas¹⁴¹. Muchas comunidades rurales recurrieron a préstamos para hacer frente a las exigencias de las tropas, pero la reducción de ingresos llevó a incrementar el endeudamiento municipal¹⁴².

Así pues, una de las soluciones que encontraron estos pueblos para superar esta situación de endeudamiento y presión fiscal fue la venta de sus propiedades comunales. Se estima la venta de unas 200 hectáreas (poco más que la superficie de la mitad de Peña Cabarga) por el valor de unos 600.000 reales¹⁴³. De esa extensión sólo se conoce el remate, extensión y dedicación de 140 hectáreas, en las que predominan los prados (casi un 57% de las fincas rústicas), seguidas de las tierras de labor (21%), los terrenos incultos (10,4%), montes, viñas, una huerta y un linar, por un valor de 418.814 reales. Dentro de los edificios se ubican las construcciones de utilización agraria, es decir, molinos, casetas, alguna casa, bodega y soportal, cuyo remate fue de unos 40.000 reales¹⁴⁴.

Junto a estas ventas de bienes concejiles, aparecen ejemplos residuales y minoritarios de venta de bienes eclesiásticos. Así, en Saro, Villacarriedo y San Miguel de Aguayo los vecinos recurren a la venta de parte de los bienes muebles de la parroquia (alhajas de plata) para

¹³⁹ SÁNCHEZ GÓMEZ, M. A., *op. cit.*, p. 83.

¹⁴⁰ *Ibidem*, p. 92.

¹⁴¹ *Ibid.*, p. 94.

¹⁴² *Ibid.*, p. 97.

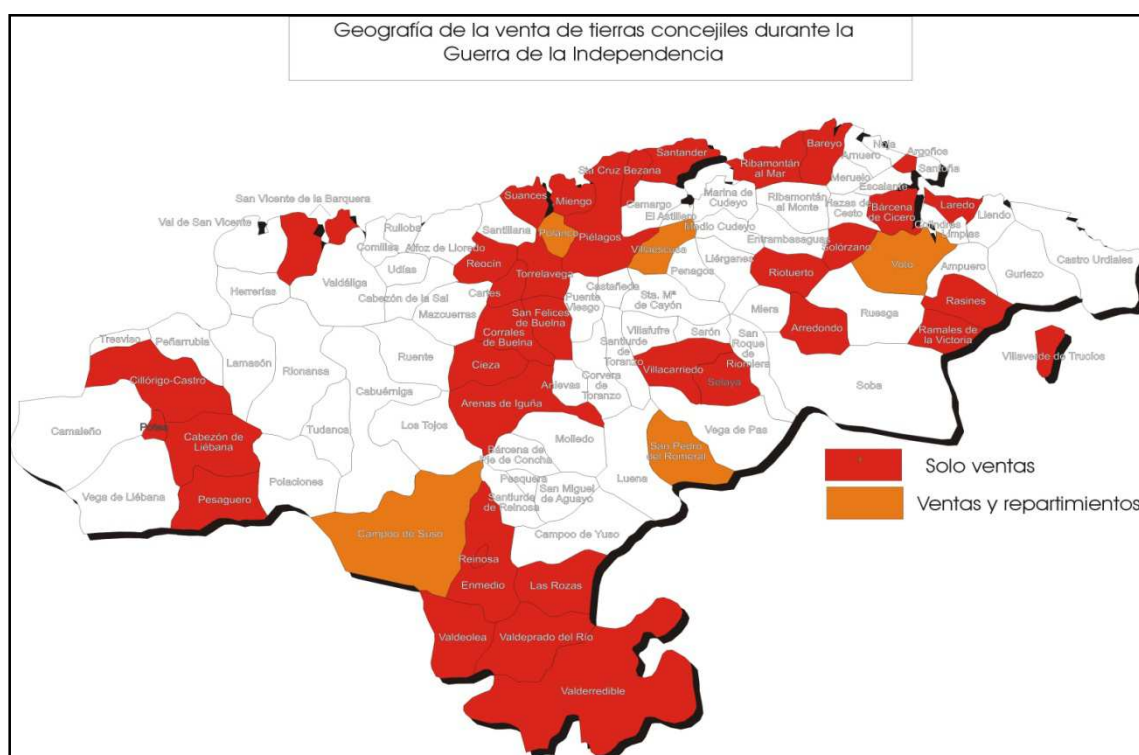
¹⁴³ *Ibid.*, p. 103.

¹⁴⁴ *Ibid.*, pp. 107-110.

satisfacer las demandas de las tropas¹⁴⁵. Además, algunos monasterios, como el de San Ildefonso de Santillana o el de San Raimundo de Potes, tuvieron que vender algún terreno para superar las estrecheces económicas. Incluso la legislación josefina impulsó la venta de bienes de parroquias y monasterios, pero en Cantabria fue muy marginal, ciñéndose a arrendamientos de algunas huertas y bosques¹⁴⁶. Por lo tanto, no parece que durante la Guerra de Independencia la política desamortizadora afectase gravemente a las propiedades eclesiásticas.

En cuanto a las zonas más afectadas por la venta de bienes concejiles, hay que señalar que coinciden claramente con aquellos lugares donde el conflicto estuvo más presente, es decir, en el eje Reinosa-Santander, donde se desamortizaron cerca de 93 hectáreas, seguido de Liébana y alguna comarca de la costa oriental¹⁴⁷.

MAPA 3



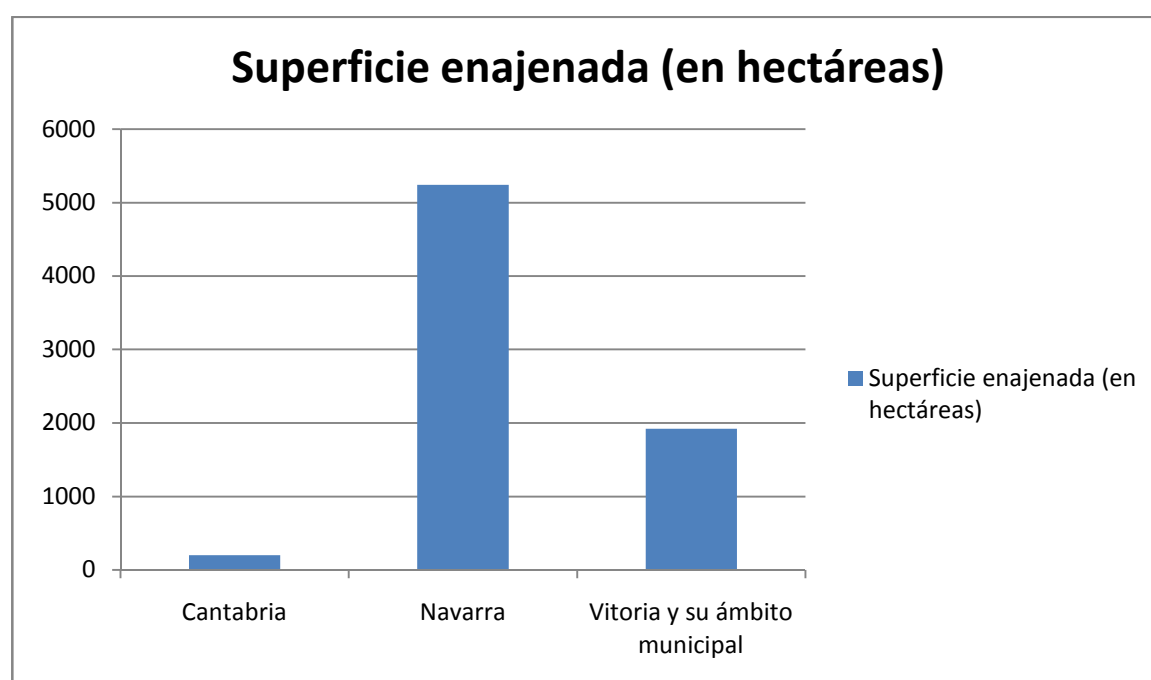
¹⁴⁵ *Ibid.*, p. 111.

¹⁴⁶ *Ibid.*, pp. 112-114.

¹⁴⁷ *Ibid.*, pp. 105-106.

En Navarra, una de las regiones más afectadas por la Guerra de Independencia y bastión del carlismo y los movimientos contrarrevolucionarios, las cifras que nos ofrece Joseba de la Torre son de 5.243,5 hectáreas rematadas por un valor de 5.503.000 reales¹⁴⁸, muy alejadas de las 60,6 hectáreas y los 207.733 reales de Mutiloa Poza, cifras que, no obstante, se refieren únicamente a Pamplona y su entorno urbano y al año 1810¹⁴⁹, y muy por encima de las de Cantabria, como puede apreciarse en los siguientes gráficos. Para el ámbito municipal de Vitoria, José María Ortiz de Orruño aporta una superficie de tierras comunales enajenadas de 1.923 hectáreas, rematadas por 1.543.678 reales¹⁵⁰. En el caso de Guipúzcoa Pablo Fernández Albadalejo considera que el valor de los propios vendidos durante esta época fue de 26.819.757 reales¹⁵¹.

GRÁFICA 5



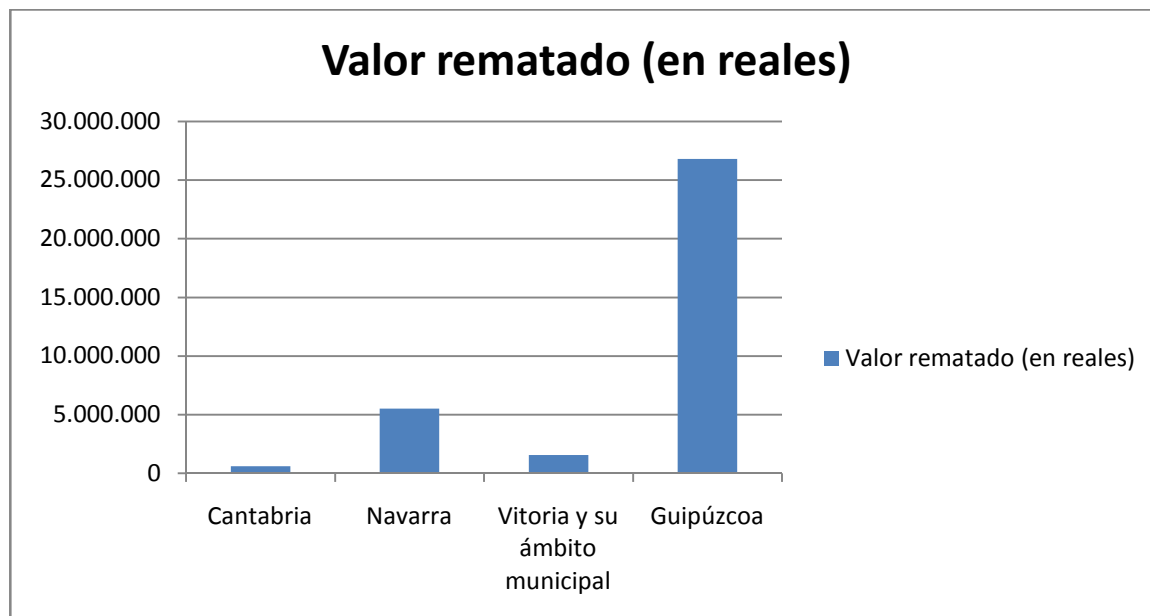
¹⁴⁸ DE LA TORRE, J., *Los campesinos navarros ante la guerra napoleónica. Financiación bélica y desamortización civil*, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1991, p. 116.

¹⁴⁹ MUTILOA POZA, J. M^a, *op. cit.*, p. 294.

¹⁵⁰ ORTIZ DE ORRUÑO, J. M^a, *Álava durante la invasión napoleónica. Reconversión fiscal y desamortización en el término municipal de Vitoria*, Vitoria-Gasteiz, Diputación foral de Álava, 1983, p. 131.

¹⁵¹ FERNÁNDEZ ALBADALEJO, P., *La crisis del Antiguo Régimen en Guipúzcoa, 1766-1833: cambio económico e historia*, Madrid, Akal, 1975, p. 295.

GRÁFICA 6



Desamortización del Trienio Liberal

En Cantabria, la primera desamortización liberal afectó exclusivamente al monasterio de Santa Catalina de Corbán. Según las estimaciones de los peritos nombrados para evaluar sus posesiones para su enajenación, poseía 87,5 hectáreas (menos que una cuarta parte de la superficie de Peña Cabarga), situadas entre la península santanderina, San Román, Soto de la Marina y Camargo, con mayoría de eriales (40,4%) y prados (37,7%), seguidos de monte, tierras, viñas y huertas. Además, contaban con algunos edificios para uso agrícola, un par de edificaciones en el casco urbano y el propio convento¹⁵². La tasación de estos bienes fue de 1.868.528 reales, aunque el monasterio, que no fue vendido, representaba casi el 72% del valor de dicha tasación; así pues, se sacaron a subasta bienes por valor de 528.980 reales, que acabaron siendo rematados en 1.397.976 reales¹⁵³.

En el caso de Navarra 800,5 hectáreas según Joseba de la Torre¹⁵⁴, superficie que obtiene también Mutiloa Poza, quien cuantifica además el remate en 8.482.156 reales¹⁵⁵, cifras muy superiores a las desamortizadas en Cantabria. Para Vizcaya sólo se tienen noticias de la venta

¹⁵² SÁNCHEZ GÓMEZ, M. A., *op. cit.*, p. 127.

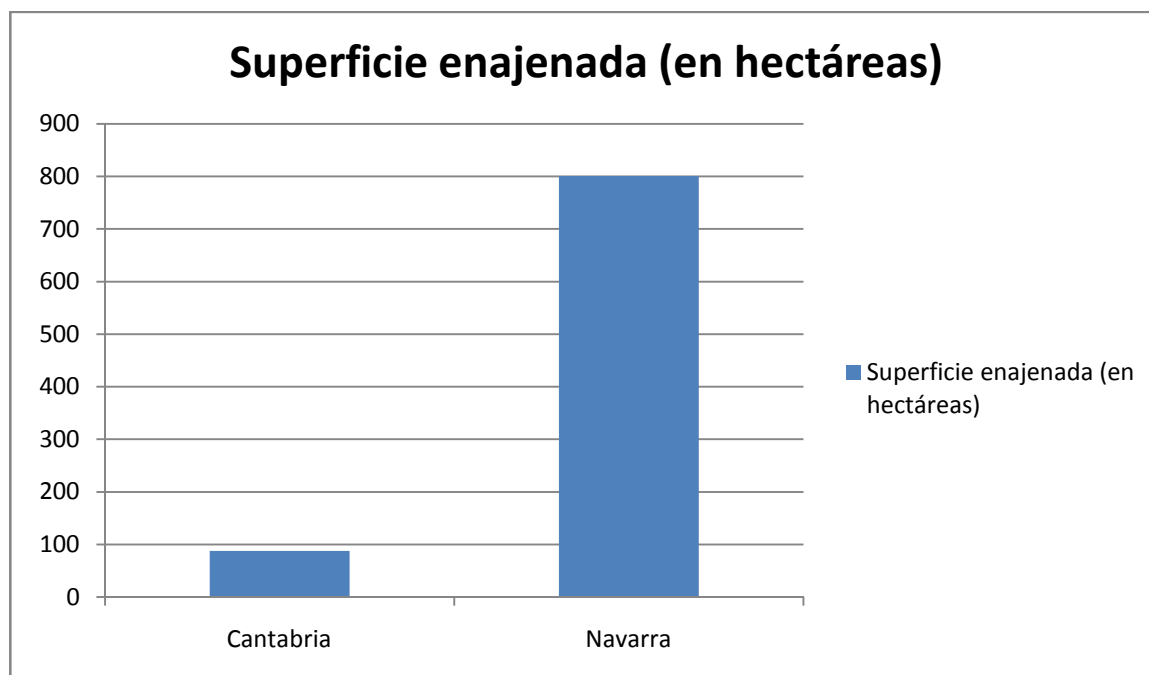
¹⁵³ *Ibidem*, p. 128.

¹⁵⁴ DE LA TORRE, J., *op. cit.*, p. 117.

¹⁵⁵ MUTILOA POZA, J. M^a, *op. cit.*, p. 331.

del inmueble convento del Hospicio del Carmen de Bilbao por 884.520 reales y ciertas fincas urbanas de las que se desconoce su valor¹⁵⁶. Una situación anómala es la que se dio en Guipúzcoa, donde se ha documentado la venta de bienes comunales por un valor de 5.845.612 reales¹⁵⁷.

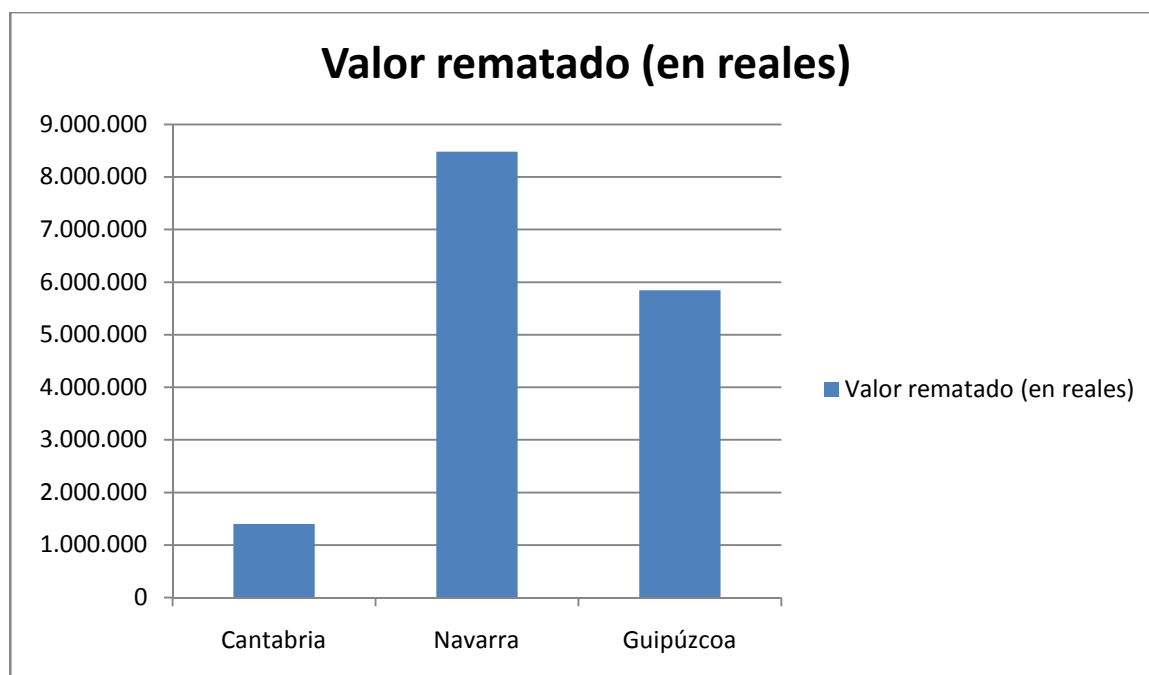
GRÁFICA 7



¹⁵⁶ MUTILOA POZA, J. M^a, *La desamortización en Vizcaya*, Bilbao, Caja de Ahorros Vizcaína, 1984, p. 64.

¹⁵⁷ FERNÁNDEZ ALBADALEJO, P., *op. cit.*, p. 298.

GRÁFICA 8



Así pues, podemos comprobar en los años en que comienzan los primeros movimientos contrarrevolucionarios, cuando, según Vicente Fernández, los clérigos tuvieron un gran peso en la incitación insurreccional y en la justificación religiosa de los mismos, tan sólo habían sido desamortizadas en Cantabria unas 1.037 hectáreas (lo cual no llega a tres veces la superficie de Peña Cabarga), de las cuales una mínima parte era propiedad de la Iglesia, por lo que parece complicado asociar este apoyo eclesiástico a la insurrección antiliberal simplemente a las políticas desamortizadoras de la época. Además, al comparar los datos cántabros con los de Navarra, donde el protagonismo de la contrarrevolución fue evidente, puede apreciarse el ínfimo peso de la superficie enajenada y los remates ejecutados durante el primer cuarto del siglo XIX.

Desamortización de Mendizábal

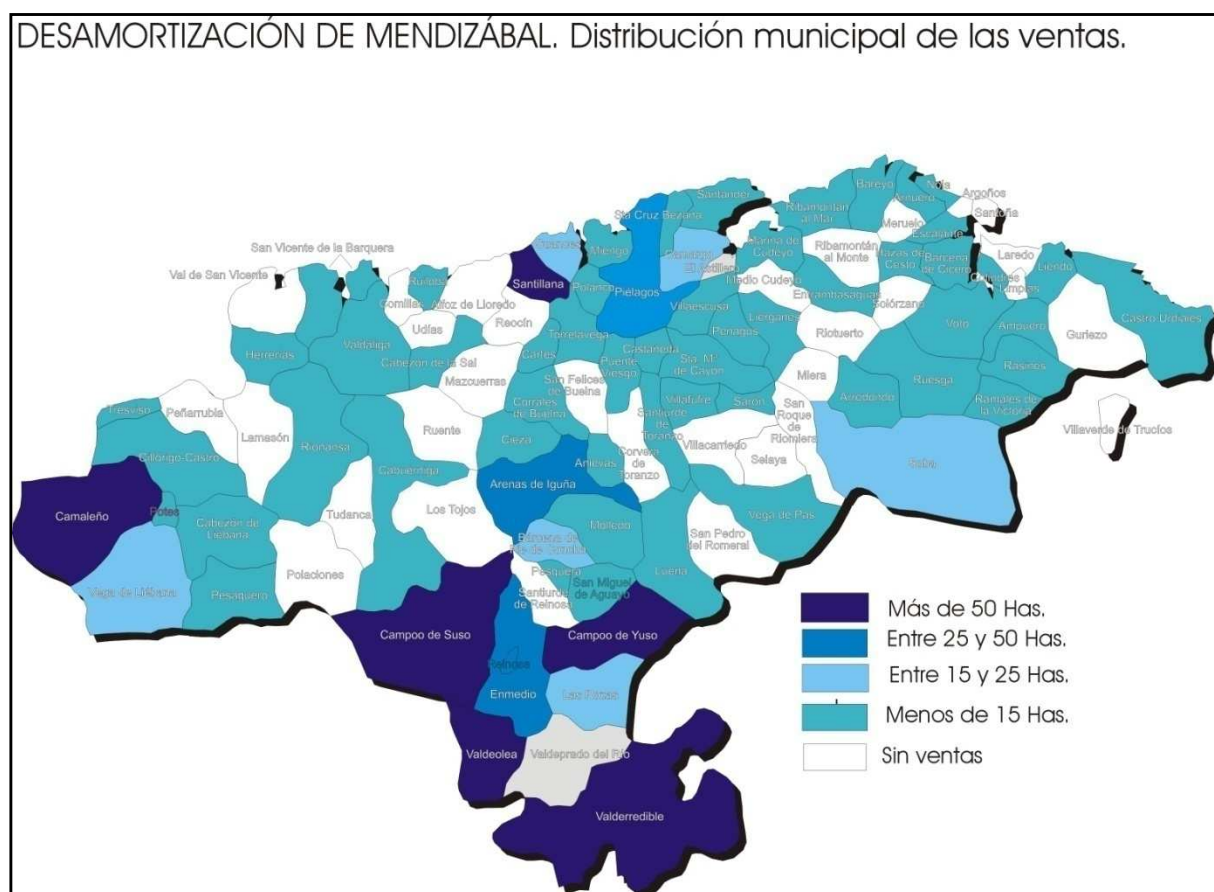
Este proceso desamortizador se extiende, en Cantabria, desde 1837 hasta 1849, es decir, comienza en los años finales del conflicto carlista. El total de bienes rústicos enajenados fue de casi 925 hectáreas (poco más que la superficie del municipio de Noja)¹⁵⁸, con mayoría de tierras de labor (56,6% del total) y prados (30,8%), seguidas de montes, viñas, huertos y eriales, por los que se pagan 6.094.896 reales¹⁵⁹. Más de la mitad del terreno subastado eran

¹⁵⁸ SÁNCHEZ GÓMEZ, M. A., *op. cit.*, p. 143.

¹⁵⁹ *Ibidem.*, p. 144.

tierras de labor, situadas principalmente en Campóo (parcelas grandes dedicadas a cereales de secano), la zona de Santillana del Mar (concentración de instituciones eclesiásticas), los territorios lindantes con el camino Reinoso-Santander y la comarca lebaniega¹⁶⁰. Por su parte, los prados enajenados eran mayoritarios en la Marina Central, seguida de Campóo, la zona central y Liébana¹⁶¹. Así pues, la mayoría de las ventas de fincas pertenecientes al clero se concentran en torno a Reinoso, al sur de la región, gracias a la cantidad de tierras del Monasterio de Nuestra Señora de Montes Claros, de los monasterios palentinos que tenían posesiones en la zona y de parroquias con un amplio patrimonio; también hay que destacar la gran cantidad de fincas rústicas en la Marina Central y Liébana, con grandes posesiones de las instituciones religiosas de Santillana del Mar y del monasterio de Santo Toribio¹⁶².

MAPA 4



¹⁶⁰ *Ibíd.*, p. 147-149.

¹⁶¹ *Ibíd.*, pp. 152-153.

¹⁶² *Ibíd.*, p. 160.

En cuanto a los edificios, se enajenaron en este período 118, con predominio de casas (94), junto a algún molino, bodega, ermita, horno, lavadero y hospital, por un valor de 4. 323. 706 reales, y concentrados mayoritariamente en Santander (pertenecientes al Cabildo de la Catedral), además de en Castro Urdiales o Las Caldas¹⁶³. A estos bienes hay que añadir, aunque en menor medida, la desamortización de fueros y censos.

Uno de los aspectos que hay que destacar en este proceso desamortizador es el peso de las instituciones eclesiásticas extraprovinciales en la titularidad de las propiedades enajenadas, pues casi un 25% de la superficie subastada pertenecía a los monasterios de Santo Domingo de Silos, San Salvador de Oña o a San Pedro de Cardena, y a los prioratos de Mave o Espinilla¹⁶⁴, prueba del escaso peso del patrimonio del clero regular montañés. También es reseñable el mayor peso de propiedades del clero secular sobre el regular (55,1% de las tierras enajenadas)¹⁶⁵.

Para poder valorar estas cifras, se puede profundizar en los datos conocidos de distintas regiones afectadas en distinto grado por los movimientos contrarrevolucionarios. Así, en el caso de Asturias se enajenó una superficie de 2.115 hectáreas, por un valor de 9.926.066 reales¹⁶⁶. En Navarra 5.263,3 hectáreas según De la Torre¹⁶⁷, y 6.238,4 según Mutiloa Poza rematadas en 58.091.704 reales¹⁶⁸, cifras que Del Río Aldaz eleva considerablemente¹⁶⁹. En Vizcaya Mutiloa Poza afirma que durante este periodo se remataron bienes por un valor de 16.578.918 reales, aunque sólo se conocen las superficies enajenadas entre 1842 y 1844, que fueron 54.559 hectáreas, cifra muy cuestionable, pues supone casi un cuarto de la superficie total de Vizcaya¹⁷⁰.

¹⁶³ *Ibíd.*, pp. 160-162.

¹⁶⁴ *Ibíd.*, p. 170.

¹⁶⁵ *Ibíd.*, p. 171.

¹⁶⁶ MORO, J.M^a, *La desamortización en Asturias en el siglo XIX*, Oviedo, Silverio Cañada, 1981, p. 135.

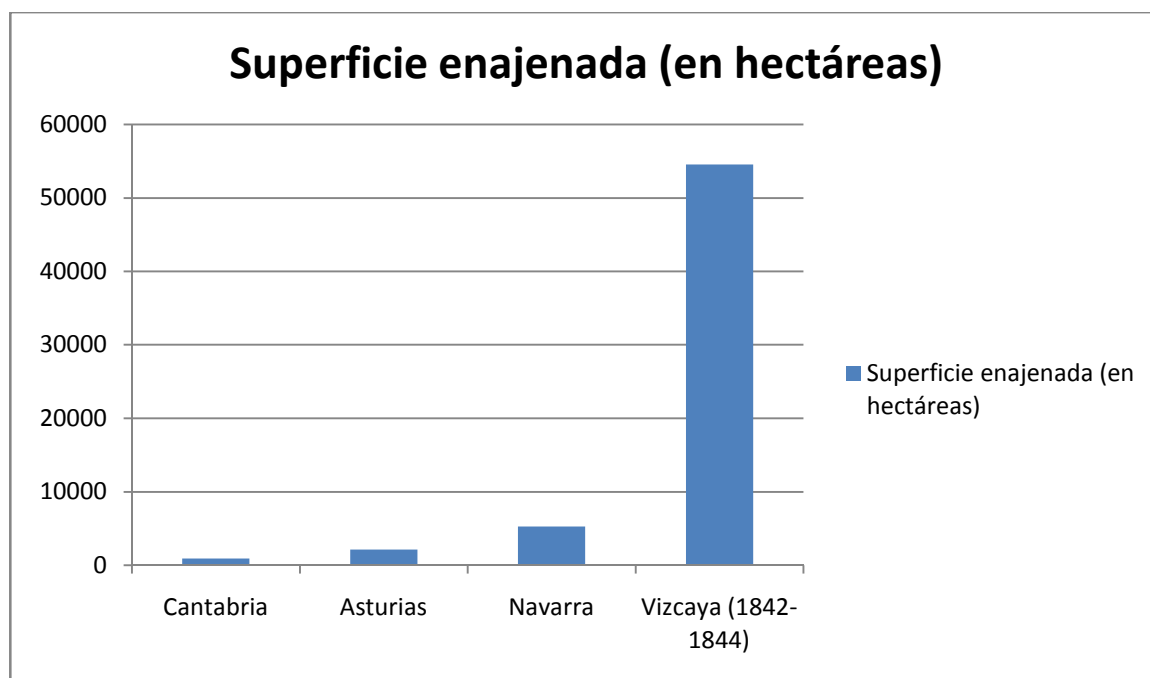
¹⁶⁷ DE LA TORRE, J., *Los campesinos navarros...*, p. 117.

¹⁶⁸ MUTILOA POZA, J. M^a, *La desamortización eclesiástica...*, pp. 403-490.

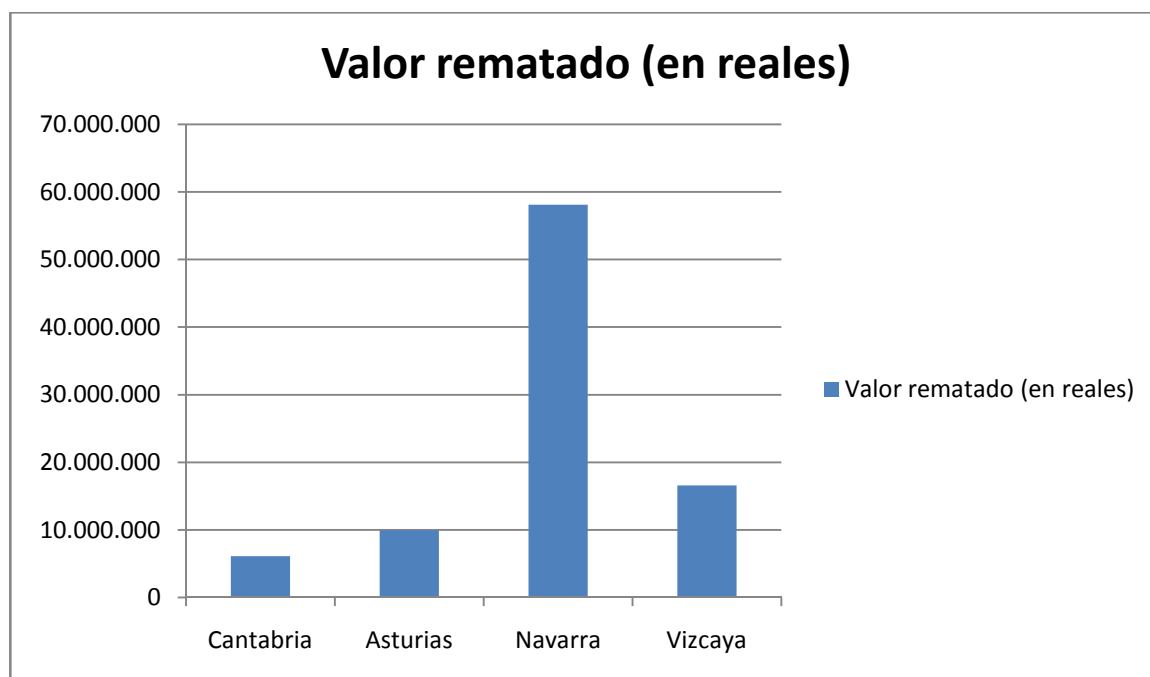
¹⁶⁹ DEL RÍO ALDAZ, R. *Orígenes de la guerra carlista en Navarra (1820-1824)*, Estella, Gobierno de Navarra, 1987, p.149.

¹⁷⁰ MUTILOA POZA, J. M^a, *La desamortización en Vizcaya*, pp. 77-155.

GRÁFICA 9



GRÁFICA 10



En conclusión, vemos que desde comienzos del siglo XIX hasta acabada la Primera Guerra Carlista han sido desamortizadas en Cantabria menos de 2.000 hectáreas (poco más que la extensión del municipio de Udías), de las cuales no todas pertenecen a las instituciones eclesiásticas, y la mayoría de las que lo son fueron enajenadas una vez comenzado dicho conflicto, por lo que no puede establecerse una relación causa-efecto entre la desamortización y el apoyo de los clérigos a los movimientos antiliberales, al menos en lo que a pérdida de patrimonio se refiere. Además, hay que partir del hecho de que la riqueza material del clero montañés era bastante limitada, como puede observarse en las cifras de superficies enajenadas y valores de los remates que hemos manejado más arriba. Estas mismas magnitudes patrimoniales tampoco debieron influir en el descontento campesino ante la pérdida de tierras arrendadas, aunque es más que posible que los nuevos propietarios, compradores de tierras desamortizadas, corrieran a aumentar los precios de arrendamiento, cuando no procedieron a expulsar a los inquilinos para introducir nuevos cultivos o nuevas formas de explotación. Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta es que, en el mundo rural montañés no se puede establecer una división social entre clero e hidalguía rural, pues la vida religiosa era una de las opciones que manejaban las oligarquías locales para sus hijos.

5. ANÁLISIS DE LA FUENTE

A continuación se procederá a analizar la principal fuente utilizada para la obtención de los datos relativos a la emigración que aparecen en este trabajo, el Censo de Policía de 1824.

Durante el Trienio Liberal (1820-1823) se había pretendido recuperar el espíritu de las Cortes de Cádiz e implantar una serie de medidas que no se pudieron poner en marcha (reformas políticas, agrarias, administrativas, etc.) y que se encontraron con la oposición de parte de la población. En este escenario se producen enfrentamientos entre partidarios y detractores de los nuevos ideales, que en algunas zonas del país adquieren el tinte de guerra civil. Con la restauración del absolutismo, en 1823, Fernando VII adopta una serie de medidas enfocadas al control de la población y a la persecución de los liberales.

Una de estas medidas será la creación de un cuerpo de policía a nivel nacional, pues hay que recordar que el problema de la seguridad pública estaba en manos de distintos cuerpos que actuaban a nivel local bajo el control del gobernador provincial o de las jefaturas militares.

Así pues, el 8 de enero de 1824, una Real Cédula promulgada por el rey Fernando VII creaba la Superintendencia General de Policía del Reino, que suponía el origen del actual Cuerpo Nacional de Policía. En este documento se detalla el organigrama del nuevo cuerpo, sus atribuciones, reglamento interno, presupuesto, etc. Entre sus atribuciones, además de las relacionadas directamente con el mantenimiento del orden y persecución de los delitos, se encuentra la siguiente:

Art. XIII. Las atribuciones privativas de la policía son las siguientes:

*1ª. Formar padrones exactos del vecindario de los pueblos del Reino, expresando la edad, sexo, estado, profesión y naturaleza de todos los individuos, con arreglo a los modelos impresos que á este fin formará y circulará el Superintendente general.*¹⁷¹

Aquí encontramos el origen de nuestra fuente, pues será el nuevo cuerpo creado a comienzos de 1824, el encargado de elaborar el censo más detallado y completo de la primera mitad del siglo XIX. En efecto, con el Censo de Policía de 1824 se pretendía tener localizada y registrada a toda la población del Reino, lo que provocó que todos los pueblos y localidades fuesen visitadas por la policía para obtener personalmente los siguientes datos de cada vecino: nombre y apellidos, edad, estado civil, ocupación, lugar de nacimiento y tiempo de residencia

¹⁷¹ Real Decreto del 8 de enero de 1824, publicado en el Suplemento a La Gaceta de Madrid el 13 de enero de 1824.

en la localidad. A ello se le añadía una numeración para cada familia y el grado de parentesco de cada individuo con el cabeza de familia.

Lugar de Nacimiento	Nombre	Edad	Estado	Destino u Ocupación	Naturaleza	Tiempo de residencia
Adal	Ant. de la Herrería	32	Casado	Labrador	de Adal	Siempre
	Su mujer Nicolasa de Romarcho	30	Do.	Do.	de Pico	50 años
	Su hijo Elías	9	Soltero	Albañil	de Adal	Siempre
	Gaspar de Romarcho	35	Casado	Labrador	Do.	Do.
	Su mujer Beatriz de Alvarado	32	Do.	Do.	Do.	Do.
	Su hijo Juan	5	Soltero	Albañil	Do.	Do.
	Su hijo Gerónimo	2	Do.	Do.	Do.	Do.
	Ant. de la Herrería					

Imagen 1. Detalle del Censo de Policía de 1824 de la localidad de Adal

El hecho de que no fuese un censo de carácter fiscal explica la ausencia de datos relativos a las propiedades y situación económica de los individuos, pero conocemos de sobra el gran número de ocultaciones e inexactitudes de los documentos que buscaban conocer las riquezas de las distintas localidades para calcular el grado de participación en la contribución correspondiente.

Uno de los aspectos más destacados del Censo de Policía de 1824 es que, por vez primera, aparece la mujer como individuo singular, con su edad, ocupación, grado de parentesco, etc., lo mismo que ocurre con los menores de edad, lo cual puede permitir, en trabajos orientados a los estudios demográficos, obtener una generosa información sobre la composición y estructura de las diferentes unidades familiares.

En el caso del presente trabajo nos ayuda mucho a conocer el verdadero peso de los movimientos migratorios en nuestra región en el momento de la restauración del absolutismo tras la breve experiencia liberal que hizo surgir los primeros movimientos contrarrevolucionarios. Para ello utilizaremos datos que están integrados en esta fuente, como el lugar de nacimiento y los años de residencia en la localidad analizada, tal y como se ha señalado más arriba.

Para acabar, hay que resaltar que el Censo de policía se conserva parcialmente para Cantabria, y sólo completo el de Vizcaya, el cual ha sido exprimido a fondo por Mercedes Arbaiza

Vilallonga y le ha permitido realizar una radiografía exhaustiva de los cambios y transformaciones en Vizcaya durante la crisis del Antiguo Régimen¹⁷².

Lugar de Nac.	Nombres	Edad	Estado	Destino u ocupación	Naturalidad	Ejército de Residencia
20	Fran. ^{co} de la Calleja	35	Casado	Lavador	de Berango	10 años
	su mujer Lorenza Barriaga	25	W	W	de Praves	W
	Juhojo Bernardo	9	Soltero	ala escuela	W	W
	W Matias	4	W	W	W	W
	W Socinaria	1	W	Inocente	W	W
	Pa. de los Ypola y la Sierra	60	Vieja	Lavadora	W	W
	Em. ^a de esta Orzula	56	Soltera	W	W	W
21	Antonio Blanco	25	Casado	Lavador	de Praves	W
	su mujer Juan. ^{ca} Gomez	25	W	W	de Praves	W
	su hijo Luciano	9	Soltero	ala escuela	W	W
	W Tomas	4	W	W	W	W
	W Antonia	1	W	Inocente	W	W
	W Bartola Cipriana	1	W	W	de Praves	W

Imagen 2. Detalle del Censo de Policía de 1824 de la localidad de Praves.

¹⁷² ARBAIZA VILALLONGA, M., *Familia, trabajo y reproducción social: una perspectiva microhistórica de la sociedad vizcaína a finales del Antiguo Régimen*, Bilbao, UPV, 1996.

6. CARLISMO, DEMOGRAFÍA Y SOCIEDAD.

Uno de los aspectos que debieran abordarse en cualquier estudio sobre el carlismo y, en general sobre todo movimiento sustentado por una amplia base rural, serían las características sociodemográficas, máxime en un periodo en el que las convulsiones de diverso tipo se sucedieron unas a otras. Las crisis de subsistencias de los inicios del siglo XIX, la invasión napoleónica, las epidemias, la pérdida de las colonias ultramarinas, con la ruptura del canal que impidió la salida de efectivos de la Península hacia América y en el ámbito de las Provincias Exentas, más Navarra, la consiguiente pérdida de uno de los mercados preferentes para el hierro vascongado, las crisis políticas, etc. Toda una serie de sucesos concatenados, a veces relacionados, que gravitaron sobre la población, en especial en las comarcas agrícolas, y que pudieron funcionar como acelerantes de una explosión social que, en el seno de la lucha dinástica entre Fernando VII y su hermano Carlos, tomó la forma de la Primera Guerra Carlista.

Así en esta época, según estos planteamientos iniciales, se produciría una grave crisis demográfica, en la que el aumento de la emigración sería uno de los principales síntomas, junto con un empobrecimiento – si bien es verdad que en ocasiones se habla para Cantabria de una *miseria endémica* – al que no fueron ajenas las medidas gubernamentales de liberalización de la tierra.

Más arriba se ha comprobado que ninguno de los procesos desamortizadores, sobre todo si se comparan con los ocurridos en otras regiones, constituyeron un trasvase significativo de propiedad. Ni durante la invasión napoleónica ni, sobre todo, durante la etapa Mendizábal hubo grandes movimientos en la titularidad de las propiedades agrícolas. En el caso de esta última desamortización, su escasa presencia territorial, se debe, sobre todo, a dos factores: a la presencia de un importante número de cenobios franciscanos – masculinos y femeninos –, cuyas reglas les impedían acumular bienes raíces y a la dependencia de alguno de los monasterios más importantes situados en territorio de la provincia de Santander de los grandes conventos del norte del Duero; debe tenerse en cuenta, además, la temprana enajenación de los bienes del Colegio de Jesuitas (1767). Luego por ese lado es difícil achacar a la desamortización parte del descontento del campesinado, traducido en carlismo. Es muy sintomático en este sentido que en los municipios en los que más prendió el movimiento ultrarrealista, apenas se vendiesen tierras del clero (incluso en varios de ellos no hubo venta alguna), como puede verse en los mapas nº 2, 3 y 4.

Aunque se realizará un análisis más profundo de las características demográficas de la Cantabria del primer tercio del siglo XIX, previamente es preciso incorporar algunos de los nuevos paradigmas en torno a la figura del campesinado de las áreas cantábricas. En los años 80 del pasado siglo aún subsistían dos columnas sobre las que se apoyaba de partida cualquier explicación del mundo rural: miseria y autosubsistencia. Sin embargo, desde los 90 del siglo pasado esta configuración del modo de ser campesino, ha sufrido cambios en profundidad. Cambios que han alcanzado incluso a la propia noción de “miseria”, tal y como se comprueba en algunos de los trabajos consultados¹⁷³. En ellos aparecen otros conceptos como “adaptatividad”, en sustitución de “miseria” y “adaptación al mercado” en vez de “autosubsistencia”. Elegimos una frase muy sintética de Domínguez Martín como ejemplo de por dónde surcan ahora los análisis sobre el mundo rural, estudios que se han generado a partir de nuevas fuentes, nuevos indicadores y nuevas metodologías:

*El impacto del mercado en los niveles de vida del campesinado de la España atlántica tuvo el efecto contrario al que preveía la tesis marxista de la proletarianización. Por el contrario, en la segunda mitad del siglo XIX se consolidó un auténtico proceso de “propietarización” entre los campesinos de esta área, que en el primer tercio del siglo XX conoció un aumento significativo de los niveles de vida y, a juzgar por los niveles de productividad del trabajo, una reducción de las disparidades espaciales de los mismos*¹⁷⁴.

Una situación de mejora, sobre todo en lo que a dieta y remanentes monetarios se refiere, que Lanza y Catalán retrotraen a los años 40 del siglo XIX¹⁷⁵.

De todas las maneras, ya Ramón Lanza en su tesis publicada en 1991 detectó un aumento de la población durante los primeros 40 años del siglo XIX, con un crecimiento anual que iba desde el 0,368% hasta el 0,714%, afectando especialmente a casi todas las comarcas de Cantabria, en especial a las costeras y algunas del interior, destacando Castro Urdiales,

¹⁷³ LANZA GARCÍA, R. y CATALÁN MARTÍNEZ, E., “Alimentación, carestías y crisis de mortalidad en la España cantábrica (1680-1860)”, *Historia agraria: Revista de agricultura e historia rural*, N° 67, 2015, págs. 11-42.

DOMÍNGUEZ MARTÍN, Rafael, “Autoconsumo, mercantilización y niveles de vida campesinos en la España atlántica, 1750-1930: algunas hipótesis a contracorriente”, en MARTÍNEZ CARRIÓN, J. M. (Ed.) *El nivel de vida en la España rural, siglos XVIII-XX*, Salamanca, Universidad de Alicante, 2002, pp. 287-231.

¹⁷⁴ Ibid. p. 288.

¹⁷⁵ LANZA GARCÍA, R. y CATALÁN MARTÍNEZ, E., *Op. Cit.* pp. 16-17.

Comillas, Laredo, Santillana, Santoña, Potes o Torrelavega, pero sobre todo la ciudad de Santander¹⁷⁶

¿Carlismo igual a desplazamientos de población?

Parece que uno de los efectos más frecuentes que se han atribuido a las zonas de conflicto fue el aumento de los flujos migratorios, a veces adoptando perfiles catastróficos. En el caso de la Primera Guerra Carlista no hay noticias de que los procesos migratorios adoptaran tales niveles, ni desplazamientos humanos de gran amplitud, ni cambios en los domicilios de los afectados, ni abandono masivo de los territorios.

Pero sí parece que los seculares movimientos de población que, definitiva o estacionalmente, constituían uno de los fenómenos demográficos más comunes en el arco cantábrico, desde Galicia hasta Navarra, quedaron alterados por el rosario de adversidades que soportó España a lo largo del primer tercio del siglo XIX. Sin embargo, como todo este proceso no ha estado respaldado por estudios demográficos específicos, será conveniente elaborar unos breves análisis enfocados a comprobar hasta qué punto estos procesos fueron la causa o, en su caso, la consecuencia del conflicto carlista.

El objetivo es medir los desplazamientos enfocando los análisis en aquellos municipios en los que el movimiento absolutista obtuvo un cierto nivel de apoyo, sin entrar por el momento en otras cuestiones que exigen un mayor detenimiento: esperanza de vida al nacer, índices de natalidad, nupcialidad, normalidad, etc.

En lo que a movimientos migratorios se refiere el indicador más sencillo y más usado es el índice de masculinidad que mide el número de hombres por cada cien mujeres. Un índice 100 señalaría una emigración cero. A medida que disminuye ese valor aumenta la emigración masculina. De esa manera, un índice de masculinidad 65 señala una altísima emigración masculina y, por el contrario, un valor superior al 100, por ejemplo 115, pone de relieve una importante emigración femenina. Valores estos puestos de ejemplo que pueden señalarse en áreas rurales pero prácticamente imposibles de hallar en aglomeraciones urbanas.

Para este somero análisis demográfico se han elegido dos tipos de municipios. Por un lado, algunos de aquellos en los que se registraron los valores más elevados de afiliación al bando carlista, casi todos situados en el área trasmerana. Debe indicarse que a mediados del siglo

¹⁷⁶ LANZA GARCÍA, R., *La población y el crecimiento económico de Cantabria en el Antiguo Régimen*, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid-Universidad de Cantabria, 1991, pp. 135-142.

XVIII, por razones que no se aportan aquí para no alargar demasiado este trabajo, los flujos migratorios permanentes eran casi inexistentes; en cambio, las salidas estacionales de los varones de estas comarcas eran parte del sistema de producción. En este grupo se han incluido municipios como Bárcena de Cicero, Argoños, Arnúero, Meruelo y Hazas de Cesto. En este grupo también se ha integrado el Valle de Cayón, que aunque no está situado en el área trasmerana, presentó una elevada afiliación carlista sin que se tengan ahora datos objetivos para explicar esta aparente anomalía, pero que no debe estar lejos de la influencia que la poderosa familia González Camino ejercía sobre el entorno.

Esta distribución de los municipios donde más apoyo obtuvo el movimiento carlista queda reflejada en la tabla 1, confeccionada a partir de los datos recogidos en el Boletín Oficial de Santander entre el 16 de diciembre de 1838 y el 21 de febrero de 1839, donde se exponen los datos de un simulacro de censo que detallaba los nombres y apellidos de los individuos que estaban al lado de los carlistas, lo que permite conocer en qué municipios tuvo más peso la causa contrarrevolucionaria¹⁷⁷.

TABLA 1. AYUNTAMIENTOS CON MAYOR NÚMERO DE CARLISTAS Y COEFICIENTES RESPECTO A LA POBLACIÓN TOTAL.

AYUNTAMIENTO	Nº DE CARLISTAS	% CARLISTAS EN LA POBLACIÓN TOTAL
Hazas de Cesto	58	12%
Meruelo	32	7%
Bárcena de Cicero	65	5%
Argoños	14	4%
Santa María de Cayón	41	4%
Escalante	28	4%
Ribamontán al Monte	45	3%
Bareyo	27	3%
Voto	47	2%
Arnúero	46	2%
Solórzano	25	2%

¹⁷⁷ SÁNCHEZ GÓMEZ, M. A., *El primer carlismo montaños: aspectos sociales y localización geográfica*, Santander, Ediciones Tantín, 1985, pp. 21-22

Como contraste a este primer grupo de municipios, se han elegido algunos en los municipios occidentales de la entonces provincia de Santander en las que, por el contrario a las anteriores, la emigración permanente o de larga duración, era una de las constantes de su sistema socioeconómico. Los municipios que componen este segundo grupo son Cabuérniga, Alfoz de Lloredo, Mazcuerras, Reocín y Cabezón de la Sal.

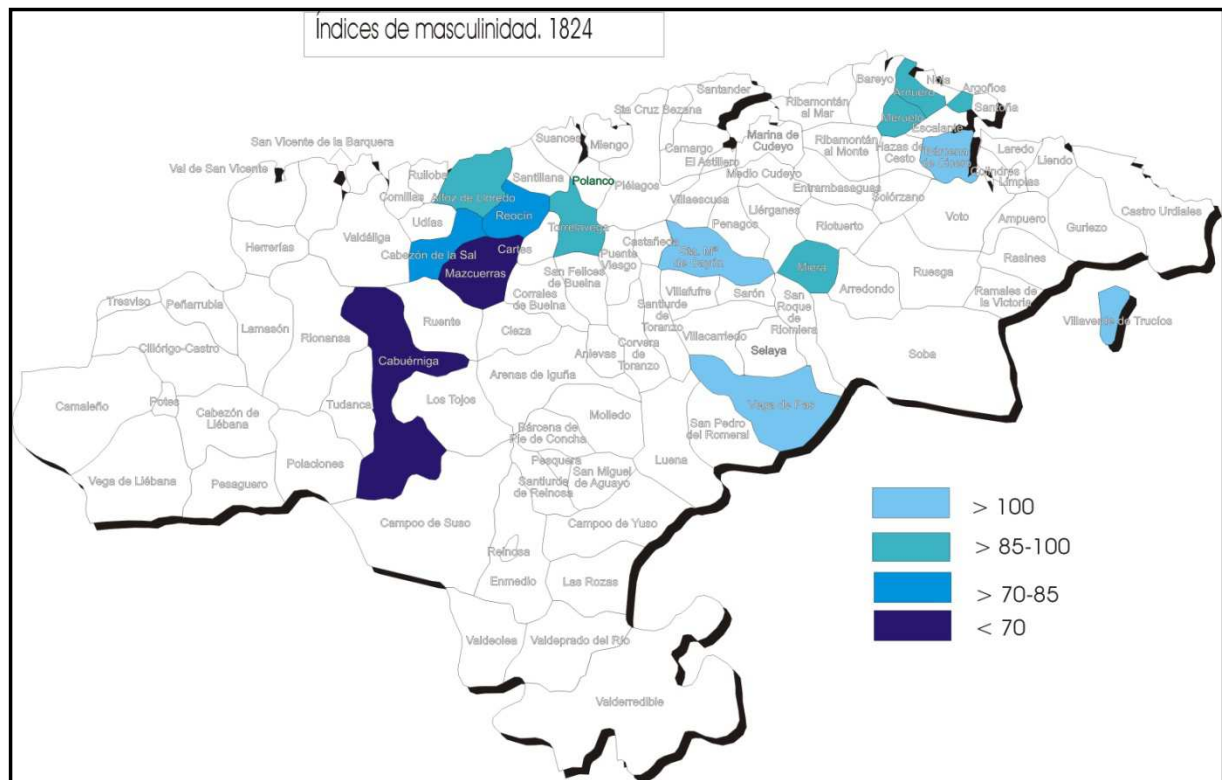
Se han añadido además otros enclaves que no entran en ninguno de los dos rangos anteriores como son los casos de Villaverde de Trucíos y Guriezo por su proximidad a Vizcaya para comprobar si esta circunstancia influía en los comportamientos demográficos relacionados con la emigración. Aunque esta no sea la misma circunstancia geográfica, se analizarán los ejemplos de las circunscripciones de Vega de Pas, Miera y Torrelavega. En el municipio pasiego se buscarán los efectos de las crisis del primer tercio del siglo XIX en sus peculiares costumbres migratorias en las que se mezclan los desplazamientos de corto radio de acción, dentro de su característico sistema de explotación ganadera, con los viajes más largos como consecuencia de sus actividades relacionadas con el contrabando, el mismo objetivo que se busca en el municipio de Miera, muy influenciada por las costumbres pasiegas. En cambio, en el caso de Torrelavega se buscan los efectos de este periodo en un núcleo en el que a mediados del siglo XVIII presentaba un modelo de emigración masculina que podía calificarse de medio-alto.

TABLA 2. ÍNDICE DE MASCULINIDAD EN DIFERENTES MUNICIPIOS CÁNTABROS EN 1824.

MUNICIPIOS	HOMBRES	MUJERES	ÍNDICE MASCULINIDAD
BÁRCENA DE CICERO	298	262	113,74
GURIEZO	549	512	107,22
VEGA DE PAS	1.139	1.080	103,31
VILLASVERDE DE TRUCÍOS	513	502	102,12
VALLE DE CAYÓN	489	485	100,82
MERUELO	372	391	95,14
ARNUERO	95	100	95
ARGOÑOS	213	232	91,81
ADAL	145	160	90,62
MIERA	552	634	87,06
ALFOZ DE LLOREDO	1.408	1.619	86,96
TORRELAVEGA	1.221	1.432	85,26
REOCÍN	480	577	83,18
CABEZÓN DE LA SAL	1.683	2.280	73,81
CABUÉRNIGA	1.959	2.802	69,91
MAZCUERRAS	701	1.034	58,66

Fuente: Archivo Histórico Provincial de Cantabria. Sección Diputación. Legajos. 1631, 1638-1, 7, 8, 1667, 1824, 2019.

MAPA 5



Como puede verse, los mayores índices de masculinidad se concentran en Trasmiera y en el Valle de Cayón. Ello significa que la emigración masculina era no sólo inexistente, sino negativa, atisbándose en los casos de Bárcena de Cicero y Guriezo una incipiente emigración femenina. El caso del municipio pasiego de Vega de Pas, con su índice escasamente superior al 100 consolida la idea de la débil migración masculina en el Valle de Pas, más proclive a los movimientos temporales. El resto de los territorios trasmeranos presentan igualmente débiles indicadores migratorios cuyos valores resaltan la evidencia de que en estas comarcas en las que parece que el apoyo al carlismo era bastante claro, la población, sobre todo la masculina, mostraba una gran estabilidad.

A partir de aquí comienzan a aparecer territorios con menor presencia de población masculina, con índices de masculinidad que llegan a alcanzar valores inferiores a 80. Destacan en este sentido Cabezón de la Sal, Cabuérniga y Mazcuerras, sobre todo este último cuya población masculina era casi un 50% inferior a la femenina.

El panorama que ofrece el análisis precedente es muy similar al obtenido a mediados del siglo XVIII a partir de los datos extraídos del Catastro del Marqués de la Ensenada; unos territorios orientales en los que apenas se movilizaban los varones de forma permanente – si bien es verdad que sus destinos predilectos eran las colonias ultramarinas – y unos municipios occidentales en los que se formaban potentes corrientes migratorias masculinas, cuyos destinos preferentes eran las ciudades andaluzas del Bajo Guadalquivir, como se ha señalado más arriba.

Como contraste a los anteriores datos, manejamos los obtenidos del Catastro del Marqués de la Ensenada enfocados a medir la intensidad de los flujos migratorios, comprobando la elevada coincidencia entre la situación obtenida en 1824 y la que el Catastro reflejó en 1753.

TABLA 3. MUNICIPIOS SEGÚN NIVELES DE EMIGRACIÓN. (SE UTILIZAN LOS MUNICIPIOS SEGÚN SU COMPOSICIÓN ACTUAL).

MUNICIPIO	1	2	3
Comillas	85	203,5	41,76
Ruente	123	325,5	37,78
Reocín	166	466,5	35,58
Cabuérniga	145	506,5	28,62
Los Tojos	26,46	359	26,46
Ruiloba	79	308	25,64
Torrelavega	152	613	24,79
Cabezón de la Sal	114	589,5	19,33
Mazcuerras	70	476,5	14,69
Alfoz de Lloredo	73	512	14,25
Guriezo	30	410	7,31
Meruelo	9	160	5,62
Arnuero	15	453	3,31
Hazas de Cesto	3	103,5	2,89
Medio Cudeyo	5	204	2,45
Riotuerto	8	336	2,38
Sta. M ^a de Cayón	7	433	1,61
Ribamontán al Monte	4	250,5	1,14
Rasines	2	254	0,78
Ampuero	1	316	0,31
Soba	1	752	0,13

1. Número de emigrantes. 2. N° de familias 3. Índice emigrantes/vecinos¹⁷⁸

¹⁷⁸ SÁNCHEZ GÓMEZ, M. A., "Dinero viajero..."

Así que las crisis del primer tercio del XIX no solo no aceleraron los movimientos migratorios masculinos, sino que en algún caso como Alfoz de Lloredo y Reocín los moderaron al elevar el índice de masculinidad por encima del valor 80, lo que induce a pensar que el carlismo no se alimentó de un descontento larvado en las áreas rurales de la entonces provincia de Santander, descontento que pudiera fomentar la conflictividad social y acelerar, aumentándolo, el tradicional flujo migratorio entre las zonas rurales cantábricas y la Baja Andalucía. Los datos comparando el siglo XVIII con los del primer tercio de la centuria siguiente, sugieren un frenazo a la emigración definitiva.

Podía esperarse una situación similar, habida cuenta de que la conexión americana se había interrumpido desde el proceso independentista de los territorios continentales americanos y, dadas las características de la inmigración montañesa a la Baja Andalucía, era muy difícil que los habitantes de las comarcas orientales se desplazasen hasta las poblaciones de las provincias de Cádiz y Sevilla para ocupar los empleos relacionados con la venta de alimentos y bebidas, ocupaciones ejercidas al menos desde mediado el siglo XVII. El monopolio de estas ocupaciones estaba ejercido por habitantes de los municipios occidentales, casi en exclusiva. Parientes en distintos grados, vecinos, se sucedían unos a otros en una cadena cuyos eslabones estaban monopolizados por vecinos y familiares, paisanos en suma que comenzaban como sirvientes en distintas escalas y que en muchas ocasiones acababan convirtiéndose en los dueños del negocio. Un proceso que estaba vetado en la práctica para la mayoría de los valles interiores.

Sin embargo, es evidente que los datos de masculinidad obtenidos en los municipios trasmeranos son rotundos en lo que emigración masculina se refiere. Podría asegurarse la inexistencia de movimientos masculinos, desvelando al tiempo una más que incipiente emigración femenina. Como la emigración femenina en esta época no alcanzaba un elevado radio de acción, se ha revisado la información contenida en el Censo de Policía de 1829 correspondiente a Santander. No se tienen noticias de por qué el Censo de Policía santanderino retrasó su confección más de cuatro años. Lanza García ya había realizado un análisis anterior de la evolución demográfica de la ciudad de Santander en la primera mitad del siglo XIX, utilizando esta fuente.

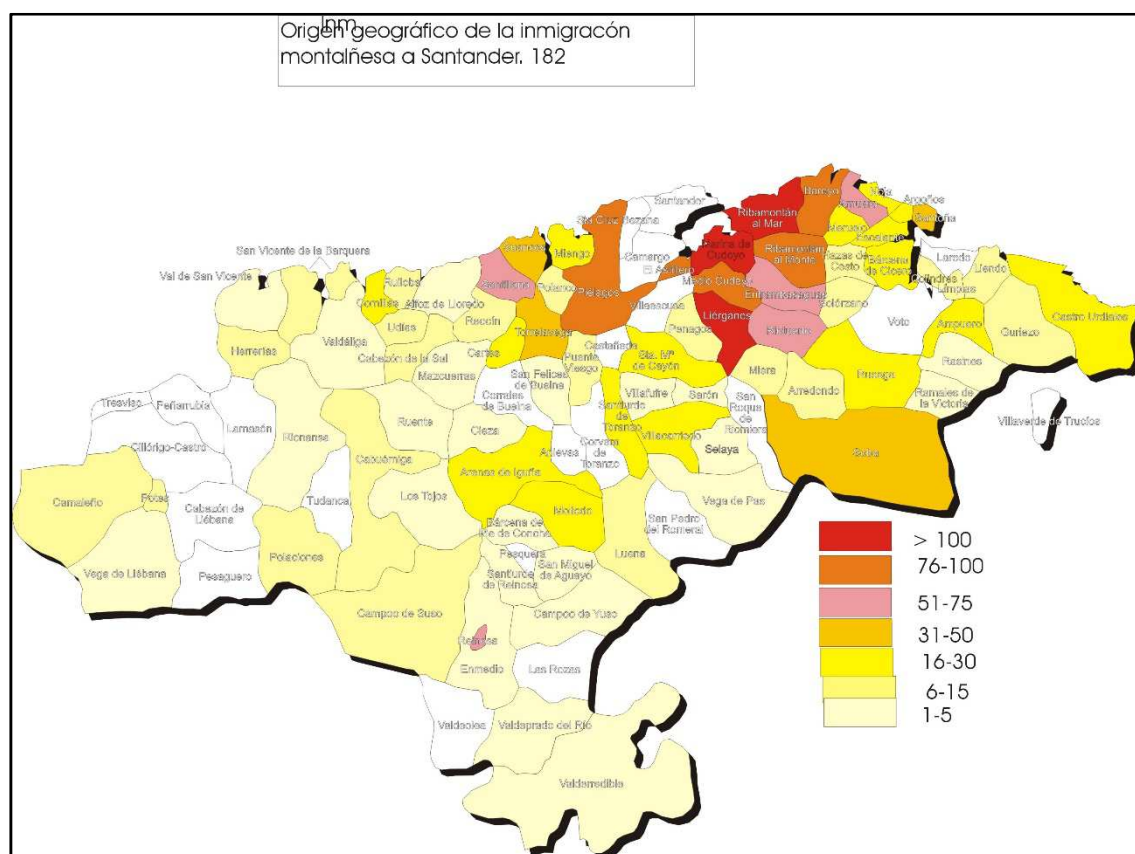
Merced este trabajo puede verse que la mayor parte de los trabajadores y trabajadoras residentes en Santander se empleaban en actividades de escasa cualificación: agricultores, jornaleros, asalariados diversos y servicio doméstico. En estos servicios estaba empleado en

1829 45,35% de la mano de obra masculina y el 80,71% de la femenina. En estos datos Lanza incluye a los llamados Cuatro Lugares¹⁷⁹, por lo que el grupo de los campesinos contribuye con el 33,26% y el 41,10% a los anteriores porcentajes.

En el mismo trabajo se analiza la contribución de la inmigración al crecimiento de la ciudad y expone que de Cantabria provenía el 18,49% de la población en 1829, pero Trasmiera aportaba casi la mitad de ese porcentaje. A ello habría que añadir un 3,74% procedente de la Marina Central¹⁸⁰, con lo cual se evidencia el peso de esas dos comarcas en la población santanderina ya que uno de cada tres emigrantes procede de ellas.

Profundizando algo más en los datos que para Santander se han añadido algunos datos más que profundizan más en el conocimiento de los movimientos migratorios de las comarcas nororientales de la Montaña durante el primer tercio del siglo.

MAPA 6

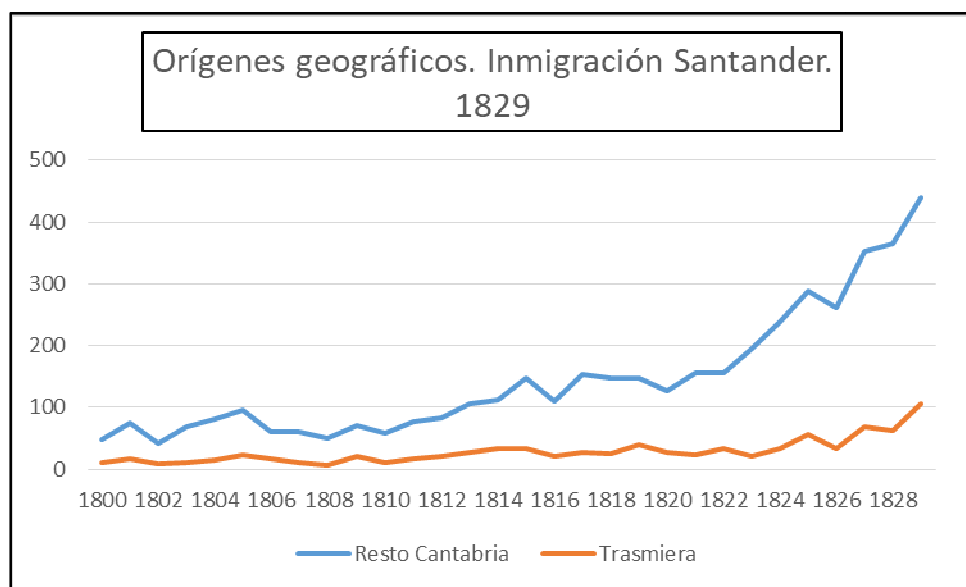


¹⁷⁹ LANZA GARCÍA, Ramón, "Crecimiento demográfico y transición urbana: el caso de la ciudad de Santander, 1752-1930", en *Investigaciones Históricas. Época Moderna y Contemporánea*. N° 25, 2005, p. 11.

¹⁸⁰ *Ibid.* p. 133.

Como puede apreciarse gráficamente, es el entorno oriental el que aporta la mayor parte de la población inmigrante de origen montañés. Ahondando en los datos ofrecidos por el Censo de Policía puede comprobarse que el aporte a la demografía santanderina se traduc a en 2.416 habitantes de los que 1.314 eran mujeres y 1148 hombres, lo que explica el sesgo femenino del  ndice de masculinidad de las poblaciones de esta zona, ya que este indicador revel  una mayor a de mujeres en Trasmiera y zonas aleda as, muchas de las cuales se trasladar an a Santander en busca de un trabajo y de un posible matrimonio que en sus lugares de origen se planteaba complicado, habida cuenta de la escasez de posibles c nyuges o la abundancia de competidoras.

GR FICA 11



Adem s, viendo la gr fica anterior, observamos que a lo largo del primer tercio del siglo XIX la inmigraci n trasmerana a la capital es constante, viendo un peque o repunte a partir de 1823. En el caso del resto de Cantabria, el trasvase de poblaci n a Santander experimenta un incremento a partir de la Guerra de Independencia, y tras una breve ca da en 1816, comienza a acelerarse a partir del inicio del Trienio Liberal.

Dentro del  mbito trasmerano, merece destacarse un grupo de un centenar y medio de inmigrantes provenientes de Li rganes, La Cavada y Riotuerto, en donde se desarrollaban, desde el siglo XVI, actividades relacionadas con el equipamiento naval, sobre todo ca ones, municiones y anclas, en las instalaciones de la Corona. Las  ltimas coladas de hierro se

elaboraron en 1834. Del número anteriormente señalado, 35 eran de origen flamenco. De ellos solamente 14 eran varones mayores de 20 años, y sólo uno de ellos desempeñaba trabajos relacionados con el hierro, Francisco Uslé, de 33 años, casado, quien declaró tener como oficio el de “herrero”¹⁸¹.

No obstante, debe indicarse que estos movimientos de población no debieron de ser consecuencia de un empeoramiento del nivel de vida de los inmigrantes. De hecho la gran mayoría de las ferrerías de la zona seguían activas a la altura de 1870. Los grandes ingenios siderúrgicos como las ferrerías de Cades en el occidente de Cantabria, La Iseca en Guriezo, la de la Pendía en Bustasur, junto a Reinosa, o la de La Rucha en Viérnoles siguieron funcionando hasta bastante más allá de 1850, alcanzando cifras de venta de hierro muy superiores a las del siglo XVIII y primeras décadas del XIX. La mayoría de las ferrerías de los municipios de Ramales, Guriezo, Rasines y Ampuero todavía labraban hierro a mediados del siglo XIX. Quizá la demanda de equipamiento metálico demandado por el tirón de las roturaciones resultado de los procesos desamortizadores, relanzó la actividad siderúrgica. No sería más que la competencia del hierro inglés y el de las nuevas fábricas la que acabarían por finiquitar una actividad centenaria que acumulaba siglos de experiencia. Tal y como exponía Francisco de Villota a una de sus amistades,

*...parece que en todas partes se van introduciendo los fierros de fabricas hasta para el herrage de las caballerías por mas que sea peor como efectivamente lo advertimos. Asi es que estan dando el ultimo golpe a nuestra antigua industria, y en tal motivo careciendo de pedidos es publica la ruina de ella...*¹⁸²

¹⁸¹ ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO, J., *Historia de una empresa siderúrgica española: los Altos Hornos de Liérganes y La Cavada, 1622-1834*, Santander, Centro de Estudios Montañeses, 1974.

¹⁸² CEBALLOS CUERNO, C., *Arozas y Ferrones: las ferrerías de Cantabria en el Antiguo Régimen*, Santander, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 2001, p. 17.

7. CONCLUSIONES

El siglo XIX comenzó de manera convulsa en España con la ocupación francesa y la posterior Guerra de Independencia. Dicho episodio no sólo provocó numerosas pérdidas materiales y humanas, sino que trajo consigo un notable incremento en la presión fiscal sobre las poblaciones que sufrieron los combates, pues ambos bandos reclamaron frecuentes exacciones. El peso de estos suministros, prestaciones o servicios, recaía directamente sobre la propia localidad, que tuvo que recurrir a la venta de bienes concejiles o al incremento de los impuestos a sus vecinos para poder hacerles frente.

Con el fin del conflicto bélico y la subida al trono de Fernando VII asistimos a la restauración del absolutismo y a un empeoramiento de las condiciones económicas con la pérdida del mercado colonial y el colapso de la Hacienda. Tras el pronunciamiento de 1820, los liberales acceden al poder y tratan de poner en marcha una maquinaria legislativa que puso en su contra a varios sectores de la sociedad. Así pues, las oligarquías proabsolutistas veían peligrar sus posiciones de poder, y el clero regular temía sufrir los efectos de la desamortización eclesiástica. A ello hay que unir el descontento del campesinado por la maltrecha situación económica provocada por los efectos de la guerra, las continuas crisis de subsistencias y el consiguiente aumento de los precios de los productos de primera necesidad.

Todo ello, junto a la nueva política tributaria, a la introducción de nuevos valores, y al desmantelamiento de estructuras e instituciones tradicionales, hizo que en el Trienio prendiese la mecha de unos movimientos contrarrevolucionarios que unieron a una élite dirigente proabsolutista con una amplia base social sin pretensiones políticas, pero muy perjudicada por la situación económica del momento. Proliferaron, a partir de 1820, las partidas y cuadrillas de “facciosos” que veían en el delito y el asalto a liberales una forma de supervivencia y de lucha contra el nuevo orden.

La restauración del absolutismo sí permitió que las antiguas élites recuperasen sus posiciones de poder, pero no logró que el campesinado mejorase sus condiciones materiales, ya que la deteriorada situación no era debida a un hecho puntual relacionado con las políticas económicas liberales, sino al desmoronamiento de un sistema productivo antiguorregimental que no estaba siendo capaz de adaptarse a las nuevas realidades. Por lo tanto, el descontento campesino continuó, y ante el temor de posibles represalias populares, Fernando VII creó el cuerpo de Voluntarios Realistas, institución paralela a la Milicia Nacional, con el que se

pretendía controlar a todos aquellos elementos proliberales o contrarios al monarca; muchos de los individuos que formaron parte de las partidas del Trienio, pasarán al nuevo cuerpo.

Serán también estos realistas los que integrarán el núcleo del movimiento contrarrevolucionario por excelencia del siglo XIX, el carlismo. En 1833 comienza la Primera Guerra Carlista, motivada por una cuestión dinástica, algo totalmente secundario para la mayor parte de quienes combatieron en defensa del infante Carlos María Isidro. Éstos luchaban, realmente, contra el liberalismo y por la defensa de la tradición; a ello le añadieron en el núcleo vasco-navarro, la defensa de los fueros, con lo que incrementaron notablemente su masa social en dichos territorios.

Dentro de este contexto histórico, que va desde la Guerra de Independencia hasta la Primera Guerra Carlista, Cantabria no fue ajena a muchos de los aspectos que se acaban de señalar. En efecto, aunque los efectos de la Guerra de Independencia no fueron tan graves como en los territorios fronterizos con Francia, la ocupación se prolongó hasta 1813 y los concejos tuvieron que recurrir a la venta de bienes comunales para hacer frente a las exacciones de ambos ejércitos. Durante el Trienio Liberal la burguesía comercial santanderina abrazó el liberalismo y sus políticas económicas, lo que ha llevado, tradicionalmente, a establecer una dicotomía entre una capital de provincia abierta y liberal, y un mundo rural cerrado y proabsolutista. Sin embargo, este cliché debe superarse, pues muchos de los miembros de la hidalguía rural tenían negocios en la ciudad, por lo que es descabellado pensar que fueran en contra de sus propios intereses.

Los principales impulsores del movimiento contrarrevolucionario en Cantabria en 1820 son, según Vicente Fernández, miembros del clero que se veían atacados por las políticas económicas liberales, principalmente por los procesos desamortizadores. En primer lugar, hay que partir de la idea de que el clero regular en Cantabria en esta época apenas tenía posesiones, ya que la mayoría de sus miembros pertenecía a la orden franciscana (franciscanos y clarisas), que tenían prohibida la posesión de bienes y la acumulación de propiedades. Por otro lado, una de las órdenes que más bienes materiales podía tener, la de los jesuitas, había sufrido la enajenación de los mismos en 1767.

Por lo tanto, partiendo de esta situación de inicio parece complicado que la desamortización eclesiástica fuese una de las causas de que el clero fuese el primero que reaccionara contra el orden liberal (siempre a través de la incitación, y rara vez, en el caso de Cantabria, mediante la participación directa en partidas contrarrevolucionarias). Al profundizar en el estudio de los

procesos desamortizadores de Godoy, de la Guerra de Independencia y del Trienio Liberal se pueden extraer varias conclusiones.

En primer lugar, que la mayor parte de los terrenos enajenados entre 1798 y 1808 pertenecía a las distintas capellanías, cofradías, obras pías y otras instituciones benéfico-docente, pero no a la Iglesia, que tan sólo poseía poco más del 20% del total desamortizado, de lo cual sólo se obtuvo un 7% del total rematado. Por otro lado, ya se ha dicho que durante la Guerra de Independencia las poblaciones afectadas por el conflicto tuvieron que recurrir a la venta de bienes concejiles para sufragar los distintos gastos derivados del conflicto: por lo tanto, lo mucho o poco que se desamortizó en este periodo no afectaba tampoco a los bienes eclesiásticos. Por último, en el Trienio Liberal tan sólo un monasterio fue afectado por el proceso desamortizador, el de Santa Catalina de Corbán, con poco más de 87 hectáreas. Si se comparan los datos de las tres desamortizaciones en Cantabria con los de Navarra, una región fuertemente ligada al movimiento contrarrevolucionario, puede comprobarse el escaso peso de la superficie enajenada a la Iglesia montañesa, por lo que si el clero incitó y encubrió la actividad insurreccional durante el Trienio Liberal, parece difícil que lo hiciera perjudicado por la cantidad de bienes desamortizados durante esta época.

El mayor proceso desamortizador de la primera mitad del siglo XIX, la desamortización de Mendizábal (1837-1849) puede servirnos para afianzar la idea de la pobreza material del clero regular cántabro, pues el 55% de las tierras enajenadas pertenecían al clero secular, y del resto, en torno al 25% eran propiedad de monasterios o prioratos situados en otras provincias. A pesar del anterior porcentaje, los bienes pertenecientes al clero secular eran muy escasos, las parroquias rara vez poseían más de unas pocas hectáreas, y eso en el mejor de los casos. Sin embargo, conviene destacar que muchos de los párrocos eran también familia de los poderosos locales, por lo que es muy difícil discernir entre la hidalguía rural acomodada y sus vástagos puestos al frente de las parroquias rurales.

Así pues, visto todo lo anterior convendría hacer una puntualización. Tradicionalmente, la desamortización, uno de los aspectos más representativos de las políticas liberales del siglo XIX, ha sido considerada como la causa principal que lleva al clero a oponerse al liberalismo y acercarse a los movimientos contrarrevolucionarios. Es cierto que hay partes de España en las que las posesiones del clero regular eran ingentes, y que sus miembros se vieron realmente afectados por dichos procesos desamortizadores; y es probable que, ante esta situación, muchos de esos individuos se opusieran a un orden liberal que les había despojado de unos

bienes que consideraban propios. Sin embargo, este esquema no puede ser extrapolado a todo el territorio nacional, pues las condiciones materiales del clero no son las mismas en todos los lugares. Así pues, al profundizar en el conocimiento de la situación material de la Iglesia montañesa y en el estudio de los datos de superficies enajenadas y remates de las mismas, no se puede establecer esa relación causa-efecto entre desamortización y movimientos contrarrevolucionarios en la Cantabria del primer tercio del siglo XIX.

Por otro lado, al trabajar con el Censo de Policía de 1824, una fuente que nos presenta datos detallados de todos los miembros de las distintas unidades familiares de cada pueblo, junto al lugar de nacimiento de los individuos y el tiempo de residencia en la localidad censada, podemos percibir el verdadero peso que tuvo el flujo migratorio en una época que siempre ha sido asociada al concepto de crisis demográfica.

Si nos fijamos en el índice de masculinidad en aquellos ayuntamientos donde se ha documentado una mayor presencia carlista (aunque siempre hay que tener presente que el carlismo en Cantabria fue minoritario) los datos son muy relevantes. Teniendo en cuenta que si ese índice es 100 no existe movimiento migratorio, y que cuanto más descienda más crece la migración masculina, nos encontramos que en la zona de Trasmiera y el Valle de Cayón hay municipios en los que incluso la migración femenina es mayor que la masculina (como en Bárcena de Cicero o Guriezo); la mayoría de los ayuntamientos de la zona presentan índices muy cercanos al 100, lo cual refleja que allí donde el carlismo contó con más apoyos, la población masculina no se movió del territorio, lo cual supone que se mantiene la tendencia de décadas anteriores, pues es una zona en la que los hijos trabajan en los oficios de sus padres y no tienen que salir en busca de mejores condiciones de vida.

En cuanto a los municipios de la zona occidental, en los que los movimientos migratorios masculinos venían siendo una constante desde el siglo XVIII (principalmente con destino a Cádiz), unos índices de masculinidad cercanos al 80 nos muestran una ralentización de la emigración (aunque hay algún lugar, como Mazcuerras, donde la población masculina es un 50% inferior a la masculina). Así pues, en una época convulsa, donde las crisis de subsistencias azotaban continuamente a las poblaciones rurales, y donde la inestabilidad política llevó al enfrentamiento entre liberales y absolutistas, no se aprecia un incremento de la emigración en las comarcas con mayores simpatizantes de la causa carlista, e incluso en aquellos lugares donde la salida de jóvenes a otras zonas en busca de una mejora de sus

condiciones materiales había tenido un peso importante en el siglo anterior, asistimos a una desaceleración del flujo migratorio.

Además, con la misma fuente documental se puede apreciar una incipiente emigración femenina, aunque hay que tener en cuenta que la documentación censal previa al Censo de Policía ignoraba a la mujer, por lo que tenemos grandes carencias en el conocimiento de numerosos aspectos relacionados con ésta. Como se ha dicho más arriba, el Censo de Policía es el primer documento que recoge los datos de las mujeres y niños de las distintas unidades familiares. En este caso se ha procedido a estudiar el Censo de Policía de la ciudad de Santander, que data de 1829 y que nos revela datos sobre el número y origen de los inmigrantes. En efecto, de los 2.416 habitantes que aparecen registrados cuyo lugar de nacimiento no era ni Santander ni ninguno de los Cuatro Lugares, 1.314 eran mujeres y 1.148 hombres, y lo que es más destacable, una gran parte de aquellas procedían de Trasmiera, es decir, de una zona en la que el flujo migratorio masculino era mínimo.

Según lo anteriormente expuesto, parece que habría que orientarse hacia análisis más micro, procurando realizar investigaciones más completas sobre alguna de las circunscripciones en las que prosperaron las simpatías carlistas. El conglomerado de factores económicos, sociales, religiosos, culturales o políticos, entre otros, podrían traerse al primer plano con el fin de acercarse a la mejor comprensión de la evolución de los grupos humanos que habitaban en las distintas circunscripciones en las que de manera aparentemente inexplicable optaron por una resistencia a las reformas liberales. Sin duda, una de las mejores opciones para iniciar este proyecto. Sin una aparente explicación, se constituyó en uno de los epicentros del apoyo al carlismo. Para empezar a reflexionar sobre este y otros casos, habría que empezar a preguntarse en el caso de Cantabria, ¿cuánto hubo de individual y cuánto de colectivo en estos primeros movimientos de rechazo al Estado Liberal?.

8. BIBLIOGRAFÍA

- ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO, J., *Historia de una empresa siderúrgica española: los Altos Hornos de Liérganes y La Cavada, 1622-1834*, Santander, Centro de Estudios Montañeses, 1974.
- ARBAIZA VILALLONGA, M., *Familia, trabajo y reproducción social: una perspectiva microhistórica de la sociedad vizcaína a finales del Antiguo Régimen*, Bilbao, UPV, 1996.
- CANAL, J., *El carlismo: dos siglos de contrarrevolución en España*, Madrid, Alianza Editorial, 2000.
- CATALÁN MARTÍNEZ, E., y LANZA GARCÍA, R., “Alimentación, carestías y crisis de mortalidad en la España cántabrica (1680-1860), en *Historia Agraria: Revista de agricultura e historia rural*, nº 67, 2015, pp. 11-42.
- CEBALLOS CUERNO, C., *Arozas y Ferrones: las ferrerías de Cantabria en el Antiguo Régimen*, Santander, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 2001.
- DOMÍNGUEZ MARTÍN, R., *El campesino adaptativo. Campesinos y mercado en el Norte de España, 1750-1880*, Santander, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 1996.
- DOMÍNGUEZ MARTÍN, R., “Autoconsumo, mercantilización y niveles de vida campesinos en la España atlántica, 1750-1930. Algunas hipótesis a contracorriente”, en MARTÍNEZ CARRIÓN, J. M., *El nivel de vida en la España rural, siglos XVIII-XX*, Salamanca, Universidad de Alicante, 2002, pp. 287-321.
- FERNÁNDEZ ALBADALEJO, P., *La crisis del Antiguo Régimen en Guipúzcoa, 1766-1833: cambio económico e historia*, Madrid, Akal, 1975.
- FERNÁNDEZ BENÍTEZ, V., *Carlismo y rebeldía campesina. Un estudio sobre la conflictividad social en Cantabria durante la crisis final del Antiguo Régimen*, Madrid, Siglo XXI de España Editores, 1988.
- FONTANA, J., “Crisi camperola i revolta carlina”, en *Recerques: Història, economia i cultura*, nº 10, 1980, pp. 7-16.

- LANZA GARCÍA, R., *La población y el crecimiento económico de Cantabria en el Antiguo Régimen*, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid-Universidad de Cantabria, 1991.
- LANZA GARCÍA, R., “Crecimiento demográfico y transición urbana: el caso de la ciudad de Santander, 1752-1930”, en *Investigaciones Históricas. Época Moderna y Contemporánea*. Nº 25, 2005, p. 11.
- MARTÍNEZ DORADO, C., “La relación entre el poder central y los poderes locales: clientelismo y conflicto en Navarra y Valencia, 1808-1841”, en ROBLES EGEA, A. (comp), *Política en penumbra. Patronazgo y clientelismo políticos en la España contemporánea*, Madrid, Siglo XXI de España Editores, 1996.
- MORO, J.M^a, *La desamortización en Asturias en el siglo XIX*, Oviedo, Silverio Cañada, 1981.
- MUTILOA POZA, J. M^a, *La desamortización eclesiástica en Navarra*, Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1972.
- MUTILOA POZA, J. M^a, *La desamortización en Vizcaya*, Bilbao, Caja de Ahorros Vizcaína, 1984.
- ORTIZ DE ORRUÑO, J. M^a, *Álava durante la invasión napoleónica. Reconversión fiscal y desamortización en el término municipal de Vitoria*, Vitoria-Gasteiz, Diputación foral de Álava, 1983.
- RÍO ALDAZ, R. DEL, *Orígenes de la Guerra Carlista en Navarra: 1820-1824*. Institución Príncipe de Viana, Pamplona, 1987.
- RÚJULA, P., *Rebeldía campesina y primer carlismo: los orígenes de la Guerra Civil en Aragón (1833-1835)*, Zaragoza, Departamento de Educación y Cultura, 1995.
- RÚJULA, P., *Contrarrevolución. Realismo y Carlismo en Aragón y el Maestrazgo, 1820-1840*, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1998.
- RÚJULA, P., *Constitución o Muerte. El Trienio Liberal y los levantamientos realistas en Aragón (1820-1823)*, Zaragoza, Ediziós de l’Astral, 2000.
- SOBOUL, A., *Problemas campesinos de la Revolución, 1789-1848*, Madrid, siglo XXI, 1980.
- SÁNCHEZ GÓMEZ, M. A., *El primer carlismo montañés: Aspectos sociales y localización geográfica*, Santander, Ediciones Tantín, 1985.

- SÁNCHEZ GÓMEZ, M. A., *Sociedad y política en Cantabria durante el reinado de Fernando VII. Revolución liberal y reacción absolutista*, Santander, Ediciones Tantín, 1989.
- SÁNCHEZ GÓMEZ, M. A., *La desamortización en Cantabria durante el siglo XIX (1800-1889)*, Torrelavega, Ayuntamiento de Torrelavega, 1994.
- SÁNCHEZ GÓMEZ, Miguel Ángel, “Dinero viajero. Censos hipotecarios y emigración, un binomio inseparable en la Cantabria del siglo XVIII”. Comunicación presentada al XVI Congreso de la Asociación de Demografía Histórica (Cádiz, 21 al 24 de junio de 2016). Inédita.
- TORRE CAMPO, J. DE LA, *Los campesinos navarros ante la guerra de la independencia: quiebra de la hacienda municipal, venta de bienes concejiles y conflictividad campesina en Navarra al final de la crisis del antiguo régimen*. Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, 1989.
- TORRE CAMPO, J. DE LA, *Lucha antifeudal y conflictos de clases en Navarra, 1808-1820*. Bilbao, UPV, 1992.

FUENTES DOCUMENTALES

- *Censo de Policía de 1824 de los municipios de Bárcena de Cicero, Guriezo, Vega de Pas, Villaverde de Trucíos, Valle de Cayón, Meruelo, Arnuelo, Argoños, Adal, Miera, Alfoz de Lloredo, Torrelavega, Reocín, Cabezón de la Sal, Cabuérniga y Mazcuerras.*
- *Censo de Policía de la ciudad de Santander de 1829.*
- *Real Decreto del 8 de enero de 1824, publicado en el Suplemento a La Gaceta de Madrid el 13 de enero de 1824.*